TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

SENTENCIA pronunciada en el juicio agrario número 183/95, relativo a la dotación de tierras, promovido por campesinos del poblado Capulhuac, municipio del mismo nombre, Edo. de Méx.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Superior Agrario.- Secretaría General de Acuerdos.

Visto para resolver el juicio agrario número 183/95, que corresponde al expediente 1/1157, relativo a la solicitud de dotación de tierras, promovida por un grupo de campesinos radicados en el poblado denominado "Capulhuac", Municipio de Capulhuac, Estado de México; en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en México, Distrito Federal, el seis de febrero de dos mil cuatro, en el juicio de amparo directo número D.A.-295/2003, y

RESULTANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Superior, el seis de diciembre de dos mil dos, pronunció sentencia en el juicio agrario citado al rubro, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el veintiséis de septiembre de dos mil uno, en el juicio de amparo indirecto número 825/99, promovida por representantes del núcleo, cuyos puntos resolutive fueron los siguientes:

"...PRIMERO. Esta sentencia se emite en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juez Sexto de Distrito, en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el veintiséis de septiembre de dos mil uno, en el juicio de amparo indirecto número 825/99, promovido por Tomás Ramírez Barón y otros, en representación del núcleo solicitante de tierras del poblado denominado 'Capulhuac', Municipio de Capulhuac, Estado de México.

SEGUNDO. Se modifica el Mandamiento del Gobernador del Estado de México, pronunciado el diez de agosto de mil novecientos cuarenta y ocho.

TERCERO. Se concede al poblado citado en el primer resolutive de esta sentencia, por concepto de dotación de tierras, una superficie de 192-32-46.30 (ciento noventa y dos hectáreas, treinta y dos áreas, cuarenta y seis centiáreas, treinta milíáreas), que se tomarán de la 'Ciénega de Chimaliapan', de propiedad Federal, para beneficiar a ciento sesenta y cuatro campesinos capacitados.

CUARTO. Comuníquese con copia certificada de la presente sentencia al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, en relación a la ejecutoria dictada el veintiséis de septiembre de dos mil uno, en el juicio de amparo indirecto número 825/99, promovido por Tomás Barón y otros, en representación del poblado 'Capulhuac', Capulhuac, Estado de México.

QUINTO. Publíquese esta sentencia en el **Diario Oficial de la Federación** y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México, y los puntos resolutive de la misma en el Boletín Judicial Agrario; inscribáse en el Registro Público de la Propiedad que corresponda; asimismo, inscribáse en el Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir los certificados de derechos correspondientes a que se refiere la presente sentencia y conforme a las normas aplicables.

SEXTO. Notifíquese a los interesados; comuníquese al Gobernador del Estado de México, a la Procuraduría Agraria y a la Secretaría de la Reforma Agraria, por conducto de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, ejecútase y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido..."

SEGUNDO. En contra de la sentencia citada anteriormente, el grupo solicitante, por conducto de Tomás Ramírez Barrón, Héctor Morales Rodríguez y Antonio Rojas Castillo, en su carácter de integrantes del Comité Particular Ejecutivo, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, habiéndoseles concedido al mismo, por ejecutoria de seis de febrero de dos mil cuatro, pronunciada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo número D.A.-295/2003, conforme al siguiente resolutive:

"...UNICO.- La Justicia de la Unión ampara y protege al COMISARIADO EJIDAL DEL NUCLEO AGRARIO DENOMINADO "CAPULHUAC", MUNICIPIO DE CAPULHUAC, ESTADO DE MEXICO, en contra del acto y autoridad precisados en el resultando primero, para el efecto indicado en el último considerando de esta ejecutoria..."

Quedando precisados los efectos de esta ejecutoria, en la parte final del considerando octavo de la misma,

"...OCTAVO.- Ahora bien, para combatir la sentencia reclamada, los quejosos aducen en el primer concepto de violación, que es violatoria del artículo 14 constitucional, debido al deficiente desahogo de las pruebas que obran en el expediente con el número 183/95, la incorrecta valoración de las mismas, inclusive por omisión de la responsable en ordenar y recabar oficiosamente la práctica, ampliación y perfeccionamiento

de medios probatorios en favor del núcleo de población quejoso, lo que se traduce en un incumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento inherentes al juicio agrario en perjuicio de la esfera jurídica de la entidad ejidal; lo anterior, debido a que en el considerando sexto de la sentencia se concluye que, de acuerdo con los informes rendidos por los comisionados de la autoridad agraria el veintiséis de noviembre de mil novecientos cuarenta y siete y veinticinco de enero de mil novecientos noventa y seis, quedó probado que el poblado solicitante de tierras tiene en posesión sólo aproximadamente ciento noventa y dos hectáreas, conclusión que se obtiene únicamente del informe señalado en segundo término.

Que el informe de veintiséis de noviembre de mil novecientos cuarenta y siete fue el resultado de trabajos técnicos de campo en los que se hizo constar que el núcleo ejidal se encuentra en posesión de quinientas catorce hectáreas, los cuales sirvieron de base para que la extinta Comisión Agraria Mixta propusiera se otorgara al poblado quejoso, por concepto de dotación de tierras, los terrenos que posee, decisión que confirmó el Gobernador del Estado de México en el mandamiento de diez de enero de mil novecientos cuarenta y ocho, fallo que se ejecutó en sus términos el dos de octubre de octubre (sic) de ese mismo año, levantándose al efecto el acta de deslinde y amojonamiento respectiva, con lo cual se constató por funcionario público en ejercicio de sus funciones que el poblado se encuentra en posesión quieta, pacífica y pública de esas quinientas catorce, las que fueron recorridas e identificadas plenamente al ejecutarse el mandato del Ejecutivo Local; que en cambio, el informe de veinticinco de enero de mil novecientos noventa y seis, se realizó en escritorio como en el mismo se señala, con ortofotos a escala de 1:5000, material documental que el comisionado obtuvo en la Subdirección de Estudio y Consulta del Territorio Estatal, de la Dirección del Sistema Estatal de Información, de la Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado de México, sin que se tomara en cuenta para la elaboración del citado informe, el acta de ejecución del mandamiento del Gobernador y planos provisionales existentes, por lo tanto, no puede haber certidumbre en cuanto a la afirmación del comisionado de que el ejido sólo está en posesión de ciento ochenta y tres hectáreas y nueve hectáreas más, las que finalmente se conceden en definitiva por la responsable, al tratarse de un informe técnico que no fue elaborado en campo, informe que no se le puede atribuir mayor valor probatorio al de veintiséis de noviembre de mil novecientos cuarenta y siete, sobre todo que los quejosos solicitaron al Tribunal Agrario responsable la realización de nuevas diligencias técnicas, sin que se hubiere ordenado la ejecución de nuevos trabajos.

Más delante agrega la comunidad quejosa, que por decreto presidencial publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el treinta y uno de octubre de mil novecientos veinticuatro, se declaró que las aguas, el lecho y las riberas de las Lagunas del Lerma en el Estado de México, son de propiedad nacional y el posterior decreto de once de septiembre de mil novecientos cuarenta y tres, se determinó que los terrenos declarados de propiedad nacional servirían para resolver las necesidades agrarias de los poblados del lugar cuando finalizaran las obras de captación y desecación de las aguas de las Lagunas del Lerma, que dejarían al descubierto terrenos aptos para aprovechamiento agrícola, por lo tanto, la relación existente entre los mandatos del Ejecutivo Federal, es que a través de la autoridad agraria competente, una vez terminadas las citadas obras y la consecuente desecación de los terrenos, servirían para resolver las necesidades agrarias de los grupos campesinos del lugar carentes de tierras, luego entonces, correspondía al Tribunal Superior Agrario verificar si las obras de captación de agua en la zona estaban concluidas y de esa manera estar en condiciones de determinar la superficie que resultaba procedente conceder al ejido solicitante de tierras.

Suplidos en su deficiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 225 de la Ley de Amparo, resultan substancialmente fundados los conceptos de violación de la comunidad quejosa, y suficientes para conceder la protección constitucional solicitada, en atención a lo siguiente.

Como puede advertirse del séptimo considerando del fallo reclamado, el Tribunal Superior Agrario destacó que del informe de veintiséis de noviembre de mil novecientos cuarenta y siete, emitido por el técnico que llevó a cabo los trabajos técnicos e informativos relacionados con la restitución y dotación de tierras, constató que el poblado grupo solicitante se encontraba en posesión de quinientas catorce hectáreas de terrenos ubicados en el área conocida como 'Ciénega de Chimaliapan', Estado de México, trabajos técnicos e informativos que sirvieron de base a la Comisión Agraria Mixta para emitir dictamen proponiendo la dotación de tierras en el número de hectáreas que el poblado solicitante tenía en posesión, y éste, a su vez, para que el titular del Ejecutivo Estatal emitiera resolución el diez de agosto de mil novecientos cuarenta y ocho, determinara confirmarlo en sus términos, mandamiento que fue ejecutado el dos de octubre del mismo año.

Sin embargo, sostuvo el propio tribunal agrario que durante el procedimiento se verificó por el comisionado de la Secretaría de la Reforma Agraria (según lo asentó dicho comisionado en su informe de veinticinco de enero de mil novecientos noventa y seis), que en el momento de la inspección el grupo peticionario se encontraba en posesión de una parte de la superficie, esto es, de ciento ochenta y tres hectáreas, dos áreas, cuarenta y seis centiáreas, treinta miliáreas, que cultivan de maíz, y el resto de las cuatrocientos sesenta y

nueve hectáreas, diez áreas, diecinueve centiáreas, diez miliáreas, las encontró inundadas y por último, que del cálculo que practicó, resultaron en la parte sur del ejido provisional de 'Capulhuac' nueve hectáreas, treinta áreas consideradas dentro del plano de la posesión provisional, que se encuentran fuera del límite del segundo vaso de las Lagunas de Lerma.

Informes a los que otorgó pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 189 de la Ley Agraria, en relación con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria.

Por otra parte, en el considerando décimo primero del fallo agrario, sostuvo que con las pruebas aportadas por el grupo solicitante de tierras, se corroboraba lo asentado en el informe rendido el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y seis, respecto de que los peticionarios no se encontraban en posesión de la totalidad de las quinientas catorce hectáreas; y que además, en relación con los terrenos inundables en una superficie de ciento veinte hectáreas, se encontraba establecida una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), autorizada y registrada por la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Delegación en el Estado de México, tramitada por el presidente del comisariado ejidal del poblado quejoso, por tanto, dicha área así como la restante superficie inundada concedida por mandamiento gubernamental, no podía contribuir para la dotación de tierras, en virtud de que las mismas no se pueden destinar a las labores agrícolas, ganaderas o agropecuarias, además de que estaban administradas por la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

Con base en lo anterior, el tribunal responsable determinó que era procedente modificar el mandamiento del Ejecutivo Estatal de diez de agosto de mil novecientos cuarenta y ocho, que concedió al poblado 'Capulhuac', Municipio de Capulhuac, Estado de México, quinientas catorce hectáreas de terrenos propiedad de la Federación, con fundamento en el artículo 204 de Ley Federal de Reforma Agraria, para beneficiar a ciento sesenta y cuatro campesinos capacitados, y conceder por concepto de dotación de tierras ciento noventa y dos hectáreas, treinta y dos áreas, cuarenta y seis centiáreas, treinta miliáreas, pues las restantes trescientas veintidós hectáreas, sesenta y siete áreas, cincuenta y cuatro centiáreas, treinta miliáreas, se encontraban inundadas y de éstas, ciento veinte hectáreas, destinadas a la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, legalmente registrada ante la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

A criterio de este Tribunal Colegiado, tanto el informe emitido por el comisionado de la Secretaría de la Reforma Agraria, el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y seis, como la circunstancia que deriva del hecho de que ciento veinte hectáreas de las quinientas catorce hectáreas otorgadas provisionalmente por el titular del Ejecutivo del Estado de México al poblado solicitante de tierras, se encuentra establecida una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, autorizada, registrada y administrada por la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Delegación en el Estado de México; resultan insuficientes para concluir que únicamente procedía dotar al grupo solicitante de tierras de aproximadamente una superficie de ciento noventa y dos hectáreas que se tomarían de la 'Ciénega de Chimaliapan'; pues en el caso no se determinó con precisión si prevalecen o, en su caso, han cambiado, las mismas circunstancias que sirvieron de fundamento a la resolución del titular del Ejecutivo del Estado de México, para otorgar provisionalmente al poblado solicitante de tierras de las quinientas catorce hectáreas que habían venido poseyendo desde 'tiempo inmemorial'; por otra parte, no se advierte de las constancias que integran el expediente agrario que el Tribunal Superior Agrario hubiere ordenado la práctica de las diligencias necesarias a fin de que se determinara si los terrenos descubiertos con motivo de las obras de captación de aguas, drenaje y desecación de la laguna de Lerma, podían o no ser consideradas para confirmar la dotación solicitada respecto de las restantes trescientas veintidós hectáreas de las que se otorgaron al poblado quejoso.

En principio, conviene tener presente que por resolución del titular del Ejecutivo del Estado de México, de diez de agosto de mil novecientos cuarenta y ocho, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el veinte de octubre del mismo año, determinó conceder al poblado solicitante de tierras una extensión superficial de quinientas catorce hectáreas de la 'Ciénega de Chimaliapan', en términos de los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO.- No es procedente la restitución de tierras, aguas y bosques solicitada por los vecinos del poblado de 'CAPULHUAC', Municipio del mismo nombre, Distrito de Tenango del Valle, Estado de México, por no haberse acreditado debidamente el despojo de tierras que denunciaron.

SEGUNDO.- Es procedente la acción dotatoria de ejidos, de los mencionados vecinos de 'CAPULHUAC', por lo que se les dota de una extensión superficial de 514-00-00 hectáreas QUINIENTAS CATORCE HECTAREAS de ciénega, que será precisamente la que el propio poblado ha venido poseyendo desde tiempo inmemorial; y que se encuentra ubicada en la ciénega de Chimaliapan.

TERCERO.- Las tierras que se conceden pasarán a poder del poblado beneficiado con todos los usos, accesiones, costumbres y servidumbres de que actualmente disfrutaban destinando dichas tierras para usos colectivos dejándose a salvo el derecho de todos los individuos capacitados para recibir tierras, a fin de que, si a sus intereses conviene, gestionen la creación de un nuevo centro de población agrícola, de conformidad con lo establecido en el artículo 100 del Código Agrario vigente.

CUARTO.- Para la ejecución del presente mandamiento devuélvase este expediente a la Comisión Agraria Mixta, ordenándose la publicación respectiva en la Gaceta del Gobierno del Estado y cúmplase.-- Así lo resuelve y firma el ciudadano ALFREDO DEL MAZO V., Gobernador Constitucional del Estado, asistido del ciudadano licenciado ABEL HUITRON Y AGUADO, Secretario General de Gobierno'.

El mandamiento de dotación del gobernador estatal se ejecutó en sus términos el dos de octubre de mil novecientos cuarenta y ocho, conforme al acta de deslinde y posesión levantada para tal efecto, de cuyo contexto se puede apreciar lo siguiente:

'ACTA DE POSESION Y DESLINDE RELATIVA A LA DOTACION DE EJIDOS AL POBLADO DE CAPULHUAC, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MEXICO.--- En el poblado de CAPULHUAC, Municipio del mismo nombre, Distrito de Tenango del Valle, Estado de México, a las trece horas del día dos del mes de octubre del año de mil novecientos cuarenta y ocho, se reunieron en la Comisaría Municipal los CC. Topógrafo Roberto Rayón C., representante de la Comisión Agraria Mixta del Estado, Octavio Enríquez, Marcelino García y Bartolo Varón, Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente del Comisariado Ejidal y los vecinos que al final se expresan, con el objeto de dar cumplimiento al Mandamiento del C. Gobernador Constitucional del Estado de fecha diez de agosto del presente año, que en sus puntos resolutive dice: PRIMERO.- No es procedente la restitución de tierras, aguas y bosques solicitada por los vecinos del poblado de 'CAPULHUAC'. Municipio del mismo nombre, Distrito de Tenango del Valle, Estado de México, por no haberse acreditado debidamente el despojo de tierras que denunciaron.- SEGUNDO.- Es procedente la acción dotatoria de ejidos de los mencionados vecinos del poblado de "CAPULHUAC", por lo que se les dota con una extensión superficial de 514-00-00 Hs. QUINIENTAS CATORCE HECTAREAS de ciénega, que será precisamente la que el propio poblado ha venido poseyendo desde tiempo inmemorial, y que se encuentra ubicada en la ciénega de Chimaliapan TERCERO.- Las tierras que se conceden pasarán a poder del poblado beneficiado con todos los usos, accesiones, costumbres y servidumbres de que actualmente disfrutaban, destinando dichas tierras para usos colectivos; dejándose a salvo el derecho de todos los individuos capacitados para recibir tierras, a fin de que, si a sus intereses conviene, gestionen la creación de un nuevo centro de población agrícola, de conformidad con lo establecido en el artículo 100 del Código Agrario vigente.- Se dio principio a la diligencia, dando lectura al mandamiento mencionado y en seguida el topógrafo comisionado, en unión de los presentes y teniendo a la vista el plano proyecto aprobado, se dirigió a identificar la susodicha superficie de 514-00-00 Hs. QUINIENTAS CATORCE HECTAREAS, recorriendo en lo posible los terrenos afectados, cuyos linderos son los siguientes; Partiendo del punto que es unión entre los terrenos afectado en Provisional los de pequeñas propiedades y los del ejido de San Pedro Tultepec, con rumbo Nor Oeste (sic) se visó a una baliza previamente colocada en la mojonera que delimita al ejido de San Pedro Tultepec por su vértice Norte Poniente, acto seguido de procedió desde el punto inicial por toda la margen de la ciénega en una línea sinuosa y con rumbo Sur Oeste y distancias de 600.00 metros, seiscientos metros, 510.00 QUINIENTOS DIEZ METROS, 680.00 SEISCIENTOS OCHENTA METROS y 750.00 SETECIENTOS CINCUENTA METROS.- hasta llegar al punto marcado en el plano proyecto en donde se señaló el lugar para la construcción de una mojonera que delimitará la esquina SN de los terrenos que se entregan; de ese punto y con rumbo Nor Oeste (sic) se visó (sic) hacia la baliza o bandera que se colocó en el vértice de la mojonera que delimita al ejido de San Pedro Tultepec arriba ya mencionada; esta visual indefinida, con la del punto de intersección el lugar que le corresponde, y del cual se calcularán sus coordenadas y distancias respectivas.- Lo anteriormente asentado se ejecutó porque en el terreno no es posible verificar caminamiento en todo su perímetro ya que la ciénega no permite acceso en su parte norte.- Terminado el recorrido anterior, el topógrafo comisionado declaró: En nombre del C. Gobernador Constitucional del Estado y en cumplimiento al mandamiento de fecha dos de octubre pasado, que concedió dotación de ejidos al poblado de 'CAPULHUAC', Municipio del mismo nombre, Distrito de Tenango del Valle, Estado de México, con 514-00-00 Hs. QUINIENTAS CATORCE HECTAREAS, doy posesión de las tierras que se acaban de recorrer y describir y que están señaladas en el plano aprobado y hago formal entrega de ellas a este poblado por conducto de su Comisariado Ejidal-- El Presidente del Comisariado Ejidal dijo: En nombre del poblado de CAPULHUAC, declaro que son de recibirse y se reciben los terrenos que fueron concedidos en dotación a este poblado, que se comprometo a respetar los linderos señalados y que se sujetará para la buena administración del Ejido, a las instrucciones dadas o que en lo sucesivo diere el Departamento Agrario.- Se hace constar que con la debida anticipación fueron

citados para la diligencia, señalándoles día, hora y lugar, a los propietarios afectados y colindantes para hacerles conocer los linderos del ejido entregado.- El topógrafo de conformidad con el artículo 245 del Código Agrario hizo las notificaciones a la Dirección General de Bienes Nacionales.- Se hace constar que el Ejido quedó debidamente deslindado amojonado, que los linderos son perfectamente conocidos de las personas asistentes a esta diligencia.- Sin incidente alguno se terminó el acto a quince horas del día de la fecha, levantándose la presente acta por quintuplicado que firman los concurrentes al acto.’.

De acuerdo con el acta de deslinde y posesión transcrita, el poblado de Capulhuac, recibió en posesión la extensión territorial de quinientas catorce hectáreas, materia del decreto de dotación, superficie que se tomó de la ciénega de Chimaliapan.

Por otra parte, debe tomarse en cuenta que por decreto presidencial de veintiséis de septiembre de mil novecientos veinticuatro, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el treinta y uno de octubre del mismo año, se emitió ‘DECLARACION de que las aguas, el lecho y riberas de la Laguna de Lerma, en el Estado de México son de propiedad nacional’.

Posteriormente, por decreto presidencial de veintiuno de julio de mil novecientos cuarenta y tres, publicado en dicho órgano oficial de difusión el once de septiembre del mismo año, se determinó lo siguiente:

‘Acuerdo que reserva para satisfacer necesidades agrarias de varios pueblos, los terrenos que se descubran con motivo de trabajos de captación de aguas de la laguna de Lerma.-- Al margen de un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.--ACUERDO A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y FOMENTO Y A LOS DEPARTAMENTOS AGRARIO Y DEL DISTRITO FEDERAL.-- En vista de que con la ejecución de las obras de captación de aguas afluentes a las lagunas de Lerma, del Estado de México, que está llevando a cabo el Departamento del Distrito Federal para el abastecimiento de agua potable de la capital, y de los estudios iniciados por la Comisión Nacional de Irrigación para el drenaje y desecación de La Ciénega, se harán aprovechables agrícolamente los terrenos que forman el vaso de la mencionada laguna; y -- CONSIDERANDO.-- Que al terminarse las obras de drenaje, los terrenos que se descubran perderán su carácter de inalienables e imprescriptibles, adquiriendo la categoría de nacionales y, por lo mismo, susceptible de enajenación a los particulares por la Secretaría de Agricultura y Fomento, de acuerdo con el artículo 6o. de la Ley de Aguas de Propiedad Nacional, de 30 de agosto de 1934; siendo la superficie probable que se ganará con las obras de desecación de La Ciénega de 6,150 hectáreas aproximadamente, de la clasificación de terrenos de humedad de primera clase.-- Que es procedente disponer de los terrenos aludidos para satisfacer las necesidades agrarias de los poblados denominados San Antonio de los Llanitos, San José de los Llanitos, Jajalpa y Amololuico, que no han sido dotados por falta de tierras disponibles en el lugar, y para cuya satisfacción bastarán 700 hectáreas aproximadamente; además de que para atender los derechos a salvo de 2,581 vecinos capacitados, que requieren una superficie de 16,186 hectáreas, así como los deficientes de superficie en las parcelas dotadas de los poblados de San Nicolás Peral, Santiago Analco, Santa María Tarasquillo, San Mateo Atenco, San Pedro Totoltepec, Santa Cruz Atizapán, San Antonio La Isla, Concepción Coatipac, San Lucas Tepetlaco, Santa María Rayón, San Juan de La Isla, Santiago Cuauhtenco, Santa María Jajalpa, San Pedro Tultepec, San Pedro Tlaltizapán, San Miguel Chapultepec, San Sebastián y San Lucas.--- Que la mayoría de los vecinos del pueblo de San Pedro Tlaltizapán, del Municipio de Tianguistengo, y de otros pueblos del Estado de México, han solicitado en arrendamiento parte de los terrenos del segundo vaso de la expresada laguna La Ciénega, he tenido a bien expresa el siguiente -- ACUERDO:-- I.- Los terrenos que se descubran en la laguna de Lerma con motivo de las obras de captación de aguas de los manantiales de Almoloya para utilizarlas en el abastecimiento de esta capital y las de drenaje y desecación que se estudian por la Comisión Nacional de Irrigación, quedarán reservados para satisfacer las necesidades agrarias de los pueblos citados en los considerándose de este acuerdo.--II.- El Departamento Agrario resolverá sobre la preferencia de los citados pueblos para dotaciones o ampliaciones de dotación sujetándose a las disposiciones del Código Agrario.-- III.- Mientras no hayan sido terminadas las obras de captación, drenaje y desecación y no se haga la declaración de que los terrenos ganados pierden el carácter de inalienables e imprescriptibles y adquieran el carácter nacionales para efectos del artículo 6o., de la Ley de Aguas de Propiedad Nacional, la Secretaría de Agricultura y Fomento podrá conceder permisos precarios de aprovechamientos anuales a las comunidades agrarias que lo soliciten, sujetándose para la determinación de la superficie concesionable y orden de preferencias a las disposiciones del decreto del 19 de septiembre de 1939.-- IV.- Los permisos precarios a que se refiere el punto anterior no concederán preferencias a las comunidades que los obtengan al disponerse definitivamente de las tierras descubiertas por el Departamento Agrario conforme al punto segundo de este acuerdo.-- V.- Publíquese y cúmplase.’.

El acuerdo presidencial transcrito precedentemente, determinó que con la ejecución de las obras de captación de aguas afluentes a las lagunas de Lerma, del Estado de México, en ese entonces realizadas por el Departamento del Distrito Federal para el abastecimiento de agua potable de la capital, y para el drenaje y desecación de La Ciénega, se harían aprovechables agrícolamente los terrenos que forman el vaso de la mencionada laguna, y disponer de los terrenos aludidos para satisfacer las necesidades agrarias de los diversos poblados señalados en el decreto.

Tal y como lo aducen los quejosos, el Tribunal Superior Agrario responsable debió ordenar la práctica de los trabajos técnicos o diligencias necesarias a fin de determinar si con motivo de la conclusión de las obras a que se refiere el decreto presidencial de veintiuno de julio de mil novecientos cuarenta y tres, se descubrieron terrenos para ser destinadas a la satisfacción de las necesidades agrarias del poblado quejoso, lo cual resultaba indispensable si se toma en cuenta que en el diverso dictamen emitido por el Delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria, de once de septiembre de mil novecientos noventa y dos, determinó que debía negarse la dotación de tierras solicitada por los campesinos del poblado de Capulhuac, municipio del mismo nombre, por las siguientes razones:

‘toda vez que la extensión de 514-00-00 has., de ciénega que les fue concedida por Mandamiento del C. Gobernador Constitucional del Estado, ésta se encuentra comprendida dentro de lo que disponen los Decretos Presidenciales de fecha 26 de septiembre de 1924, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 31 de octubre del mismo año, y el del 21 de julio de 1943, publicado el 11 de septiembre de ese mismo año, y a la fecha no han sido desincorporados los terrenos a que se refiere el decreto señalado en segundo término’.

Dictamen que fue confirmado por el Cuerpo Consultivo Agrario emitido el trece de octubre de mil novecientos noventa y tres, al determinar que debía negarse la dotación de tierras en virtud de los terrenos eran propiedad de la Federación según decreto presidencial y no habían sido desincorporados.

Conforme a los dictámenes citados en el párrafo precedente, es posible advertir que las autoridades agrarias propiamente formulan reconocimiento en torno a que las quinientas catorce hectáreas que provisionalmente se dotó a la comunidad ejidal quejosa por mandato del Ejecutivo del Estado de México, o parte de ellas, podrían formar parte de los terrenos a que se refiere el decreto presidencial de veintiuno de julio de mil novecientos cuarenta y tres, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el once de septiembre del mismo año, y consecuentemente, aptas para ser destinadas a satisfacer sus necesidades agrarias, lo que viene a corroborar que debieron llevarse a cabo los trabajos técnicos y diligencias necesarias a fin de resolver con otros medios de convicción sobre la acción de dotación ejercida por el núcleo de población quejoso, y no únicamente con base en el informe técnico formulado el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y seis por el técnico comisionado por el Cuerpo Consultivo Agrario.

Más aun, si se considera que la comunidad ejidal solicitante de tierras recibió de las autoridades agrarias, en aquel entonces de la Comisión Agraria Mixta, la posesión de quinientas catorce hectáreas que se tomaron de la ciénega de Chimaliapan, extensión territorial que se deslindó conforme al acta levantada el dos de octubre de mil novecientos cuarenta y ocho con motivo de la ejecución del decreto de dotación de tierras del Gobernador del Estado de México de diez de agosto de mil novecientos cuarenta y ocho, publicado en el órgano estatal oficial de difusión el veinte de octubre del mismo año.

En efecto, ello se estima así toda vez en el informe técnico de veinticinco de enero de mil novecientos noventa y seis emitido por el técnico comisionado por el Cuerpo Consultivo Agrario, se afirmó que ‘el poblado de referencia actualmente se encuentra en posesión de una parte de la totalidad de la superficie con cultivos de maíz, ya que el resto de ésta se encuentra inundada la cual no se puede cultivar, pero manifiestan los vecinos que en años anteriores se cultivaba la totalidad de la superficie, esto se observa en el plano elaborado por el suscrito y para mayor ilustración se anexan fotografías tomadas al terreno de cultivo, así como de las zonas inundadas el día de la inspección’.

En cambio, en el acta de deslinde y posesión de veinte de octubre de mil novecientos cuarenta y ocho, transcrita con anterioridad, se asentó en la porción relativa a la entrega de la posesión que ‘Terminado el recorrido anterior, el topógrafo comisionado declaró: En nombre del C. Gobernador Constitucional del Estado y en cumplimiento al mandamiento de fecha dos de octubre pasado, que concedió dotación de ejidos al poblado de ‘CAPULHUAC’. Municipio del mismo nombre, Distrito de Tenango del Valle, Estado de México, con 514-00-00 Hs. QUINIENTAS CATORCE HECTAREAS, doy posesión de las tierras que se acaban de recorrer y describir y que están señaladas en el plano aprobado y hago formal entrega de ellas a este poblado por conducto de su Comisariado Ejidal’, actuación de la que se advierte que el poblado solicitante de tierras recibió en posesión las quinientas catorce hectáreas materia del decreto dotatorio.

Lo anterior, resulta suficiente para conceder la protección constitucional a fin de que el Tribunal Superior Agrario deje insubsistente la sentencia reclamada, y proceda a ordenar la práctica de los trabajos técnicos y diligencias necesarias para determinar si las restantes trescientas veintidós hectáreas de las que inicialmente se dotó a la comunidad, ejidal quejosa por mandato del Ejecutivo del Estado de México, es posible sean tomadas de los terrenos a que se refiere el decreto presidencial de veintiuno de julio de mil novecientos cuarenta y tres, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el once de septiembre del mismo año, y consecuentemente, aptas para ser destinadas a satisfacer sus necesidades agrarias; hecho que sea, proceda a dictar la resolución que corresponda.

En el entendido de que la declaratoria de procedencia de la acción de dotación de tierras, y la concesión al poblado solicitante de una superficie de ciento noventa y dos hectáreas, treinta y dos áreas, cuarenta y seis centiáreas, treinta miliáreas, que serán tomadas de la 'Ciénega de Chimaliapan', por no ser materia de la litis en el presente juicio de garantías, deben quedar intocadas y reiterarse en la nueva resolución, sin perjuicio de que con motivo de los nuevos trabajos técnicos y diligencias que ordene practicar el tribunal agrario responsable por virtud del amparo que se concede, decida que al poblado quejoso le corresponde una superficie mayor a la que ya determinó.

Visto el resultado obtenido, este Tribunal Colegiado estima innecesario ocuparse de los demás conceptos de violación a través de los cuales la comunidad quejosa aduce violaciones de forma, toda vez que con la protección constitucional otorgada podría obtener mayores beneficios..."

TERCERO. En cumplimiento a la ejecutoria, pronunciada en el amparo número D.A.-295/2003, emitida por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en México, Distrito Federal, el seis de febrero de dos mil cuatro, este Tribunal Superior Agrario, emitió acuerdo plenario en los siguientes términos:

"...PRIMERO. Se deja insubsistente la sentencia definitiva de fecha seis de diciembre de dos mil dos, pronunciada por el Tribunal Superior Agrario en el expediente del juicio agrario 183/95, que corresponde al administrativo 1/1157, ambos relativos a la dotación de tierras al poblado 'Capulhuac', Municipio de Capulhuac, Estado de México, en la inteligencia de que al dictarse la sentencia en cumplimiento a la ejecutoria de amparo deberá reiterarse la afectación sobre la superficie de ciento noventa y dos hectáreas, treinta y dos áreas, cuarenta y seis centiáreas, treinta miliáreas, sin perjuicio de que con motivo de la realización de los trabajos técnicos, resulte afectable una mayor superficie.

SEGUNDO. Túrnense al Magistrado Ponente copias certificadas del presente acuerdo y de la ejecutoria a la que se está dando cumplimiento, para que siguiendo los lineamientos de la misma, en su oportunidad, formule el proyecto de sentencia correspondiente, y lo someta a la aprobación del Pleno de este Tribunal Superior..."

CUARTO. En el presente asunto, el Magistrado de la causa, pronunció un acuerdo para mejor proveer, del cual se dará cuenta con posterioridad, esto con el fin de que se continúe con un orden cronológico en el expediente que nos ocupa.

QUINTO. A fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito, se analizó el expediente del juicio agrario 183/95, relativo a la solicitud de dotación de tierras al poblado "Capulhuac", Municipio Capulhuac, Estado de México, en el cual obran las siguientes actuaciones procesales.

- Por escrito de primero de septiembre de mil novecientos treinta y seis, un grupo de campesinos del poblado "Capulhuac", ubicado en el Municipio del mismo nombre, en el Estado de México, solicitaron al Gobernador del Estado de México, la restitución de tierras y bosques que formaban parte de la "Hacienda Texcaltengo", que les pertenecían desde tiempo inmemorial y de las que habían sido despojados; previa sustanciación del procedimiento, por Resolución Presidencial de diez de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el veintisiete de noviembre del mismo año, se declaró improcedente la acción agraria intentada, en virtud de que el grupo no había demostrado la fecha y forma del despojo de las tierras que denunciaron y, resultar apócrifos los títulos que habían presentado.

- Por escrito de treinta de mayo de mil novecientos cuarenta y cuatro, vecinos del poblado citado, solicitaron al Gobernador del Estado de México, la restitución de los terrenos que amparaban sus títulos primordiales y de no proceder tal acción, ésta se revirtiera a dotación de tierras.

- La solicitud citada, fue turnada a la Comisión Agraria Mixta, quien la instauró el primero de julio de mil novecientos cuarenta y cuatro, y registró con el número 1/1157, publicándose en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado, el veinticuatro de junio del mismo año, bajo el número 51 tomo LVII.

- El Comité Particular Ejecutivo del poblado solicitante, se integró con Octaviano Enríquez, Florentino Peña y Bartolo Barón, como presidente, secretario y vocal, respectivamente, expidiéndoseles sus nombramientos, el diecinueve de junio de mil novecientos cuarenta y cuatro.

- Por oficio 195, de diecisiete de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, la Comisión Agraria Mixta en el Estado, comisionó a Enrique L. Téllez, para que practicara trabajos censales, quien rindió su informe el treinta de octubre de ese mismo año, del que se desprendía la existencia de doscientos cuarenta y dos campesinos capacitados, según junta censal llevada a cabo del diecisiete al veinticinco de octubre del año citado.

- Por oficio 1131, de veintiocho de octubre de mil novecientos cuarenta y siete, la Comisión Agraria Mixta en el Estado de México, comisionó a Efrén Espinosa Hernández, a fin de que practicara trabajos técnicos informativos, conforme al artículo 223 fracciones II y III del Código Agrario de 1942; comisionado, que el veintiséis de noviembre del mismo año, rindió informe del cual se conoce que:

“...Dentro del radio de 7 kilómetros considerados desde el centro del poblado solicitante, se encuentran ubicados los predios denominados Hacienda de Tlaxcaltenco, Hacienda de Texcalpan, Hacienda de Atenco, Ciénega de Chimaliapan y pequeñas propiedades cuya situación actual es la siguiente:

HACIENDA DE TEXCALTENCO.- La Resolución Presidencial dictada en el expediente restitutorio del poblado para el que se hace este estudio, manifiesta que originalmente esta finca perteneció al señor Lic. Eduardo García, que dividida en tres fracciones una de las cuales quedó en poder del citado señor Lic. García, otra en el del señor Luis Berriozábal y la tercera en poder de la Compañía Mexicana Lechera y de Piscicultura S.A., constando de una superficie de 185-60-00 Hs., de las que 136-40-00 Hs. son de terrenos de temporal y 49-20-00 Hs., de monte, equivalentes a 74-35-00 Hs., de riego teórico, siendo por tanto inafectable, haciéndolo constar así la Resolución Presidencial que antes se menciona.

HACIENDA TEXCALPAN.- Esta finca después de la afectación que sufrió para la dotación de ejido del poblado San Martín Ocoyocac, por Acuerdos Presidenciales de fecha 15 de abril de 1942, fueron declaradas pequeñas propiedades inafectables dos de las fracciones en que se encuentra dividida la pequeña propiedad respetada a esta finca y que es como sigue:

Una fracción de la ex-hacienda de Texcalapan a favor del señor Luis Riva, con una superficie de 146-00-00 Hs., de las que 60-00-00 Hs. son de terrenos de temporal, 44-00-00 Hs. de agostadero de buena calidad y 41-00-00 Hs. de agostadero de mala calidad, equivalentes a 46-62-50 Hs. de riego teórico.

Otra fracción denominada Rancho de la Vega, que fue parte integrante de la Ex-hacienda de Texcalpan, a favor del señor Rodolfo Delcour, con una superficie de 97-75-00 Hs., de las que 45-00-00 Hs. de riego, 5-00-00 Hs. de temporal, 29-75-00 Hs. de agostadero de mala calidad, equivalentes a 52-45-50 Hs. de riego teórico.

HACIENDA ATENCO.- Según datos recabados en el expediente dotatorio del poblado San Bartolito, municipio de Calimaya, Mex. esta finca perteneció a la sucesión del señor Rafael Barbosa con una superficie de 2874-75-14 Hs. de diversas calidades.

Según lo asentado en la Resolución Presidencial de fecha 9 de enero de 1930, dictada en el mismo expediente dotatorio que se cita, se viene en conocimiento que de la Sociedad Rafael Barbosa fue construida en el año de 1887, por escritura de 28 de junio del mismo año, que al fallecimiento del citado señor Rafael Barbosa, hizo partícipes del acervo hereditario a su cónyuge Luz Saldaña Vda. De Barbosa y a sus hijos Juan, Antonio Rafael, Manuel, Aurelio y Concepción Barbosa, continuando estas personas constituidas en la misma sociedad para la explotación de las haciendas de San Diego de Los Padres, Atenco y sus Anexos, prorrogando el término de la sociedad, por escritura registrada en el año de 1899, cuya sociedad obtuvo por compra la Hacienda Chincua, ubicada en el Estado de Michoacán.

Por escritura de 13 de septiembre de 1899, se separó de la Sociedad el señor Aurelio Barbosa, pagándole su haber hereditario con el predio San Agustín y parte de la Estancia de la Vaquería.

Habiendo fallecido la señora Luz Saldaña Vda. De Barbosa, la sociedad subsistió, según el testamento respectivo.

Por escritura de 20 de mayo de 1905, la señorita Concepción Barbosa se separó de la sociedad, habiéndole pagado la parte que le correspondía en la herencia.

Como el término de la sociedad se vino prorrogando hasta 1918 al ponerse en vigor la Constitución Política del Estado de México que ordenó el fraccionamiento de las fincas mayores de 700-00-00 Hs. En despoblado y 100-00-00 Hs. Dentro del círculo de 4 kilómetros de la plaza principal de todo el poblado de más de 1,000 habitantes.

Que con este motivo para dar cumplimiento a tal disposición, los señores Barbosa procedieron a fraccionar la hacienda de Atenco y sus anexos Zacuala, Tepemajalco, Estancia de la Vaquería y Santiaguito, quedando este fraccionamiento dividido en 28 fracciones en la siguiente forma:

Fracciones 3, 11, 15, 20 y 28 con superficie de 513-85-00 Hs. De terrenos de diversas calidades, a la señorita Herlinda Barbosa.

Fracciones 6, 8, 19, 21, 23 y 24, con extensión de 615-92-60 Hs. de diversas calidades, al señor Juan Barbosa.

Fracciones 5, 7, 12, 16 y 22 y el casco de la Hacienda Tenango con superficie de 521-06-26 Hs. de diversas calidades, al señor Rafael Barbosa.

Fracciones 1, 4, 9, 13, 18 y 27, con superficie de 598-04-50 Hs. de diversas calidades, al señor Rafael Barbosa.

Fracciones 2, 10, 14, 17, 25 y 26, con superficie de 615-05-50 Hs. de diversas calidades, al señor Manuel Barbosa.

Haciendo un total la superficie de estas fracciones de 28863-93-86 Hs. Que coinciden más o menos con la superficie que al principio se asienta.

La misma Resolución Presidencial anotada al principio del estudio de esta finca, en su considerando cuarto expresa: que el fraccionamiento de que se trata efectivamente es legal, pero que dada la superficie que integra cada fracción, sí son afectables por sobrepasar la extensión superficial que debe formar la pequeña propiedad, por lo que la finca fue afectada en sus diversas fracciones para beneficiar a distintos poblados, en la siguiente forma:

San Bartolito, dot.	218-67-90 Hs.
San Bartolito ampln. Automática.	90-20-00 Hs.
San Miguel Chapultepec, dot.	497-54-00 Hs.
San Juan de la Isla, dot.	104-16-25 Hs.
San Antonio de la Isla, dot.	289-00-00 Hs.
Concepción Coactipac, dot.	139-50-00 Hs.
Santa Cruz Atizapan dot.	204-80-00 Hs.
San Lucas Tepemejalco, dot.	120-00-00 Hs.
San Lucas Tepemejalco, ampln.	30-40-00 Hs.
San Pedro Tlaltizapan, dot.	497-54-00 Hs.
Santiaguito ampln.	24-40-00 Hs.
TOTAL	2,216-22-15 Hs.

La Resolución Presidencial de fecha 4 de agosto de 1937, dictada en el expediente dotatorio del poblado de San Pedro Tlaltizapán, en su considerando quinto expresa: se dejan a salvo los derechos de 473 capacitados para quienes no alcanza parcela, a fin de que en los términos de ley, soliciten la creación de un nuevo centro de población agrícola, en el concepto de que la pequeña propiedad que se respeta a la Sociedad Rafael Barbosa Sucesores, ya fue fijada en la HACIENDA DE SAN DIEGO DE LOS PADRES, de lo que se desprende que esta finca quedó agotada pero según el croquis de conjunto informativo correspondiente, aparece que en esta finca existen unas fracciones que hacen una superficie de 100-00-00 Hs. De diversas calidades, pero por informaciones que se han tomado se llega en conocimiento de que esta superficie les fue adjudicada a varios poblados como pago de pasteos del ganado que poseía esta finca.

Por lo que se refiere a la hacienda de San Diego de los Padres, aun cuando está alejada del radio de 7 kilómetros del poblado solicitante, se hace un estudio de ella en virtud de ser un anexo correspondiente a la Sociedad de Rafael Barbosa Sucesores, quedando en el mismo estudio descrita la situación legal de la hacienda de CHINCUA, ubicada en el Estado de Michoacán.

En el expediente ampliatorio del poblado de San Mateo Oztzacatipan, se encuentra un estudio de la finca llevado a cabo por el C. Antonio Romero P. Y que en lo conducente dice:

HACIENDA DE SAN DIEGO DE LOS PADRES.- según datos del Registro Público de la Propiedad, que obra en el archivo de la Delegación del Departamento Agrario, esta finca fue adquirida por los señores Rafael y Jesús Barbosa, por escritura otorgada ante la fe del Notario Público Ramón de la Cueva el día 13 de octubre de 1863, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, el día 21 del mismo mes y año, bajo la partida número 33 del Libro de Hipotecas, a fojas 18 frente y vuelta, con una superficie total de 867-63-25 Hs. De tierras.

Esta finca fue afectada con 66-00-00 Hs. De agostadero laborable para la dotación del pueblo de San Andrés Cuexcontitlán, según Resolución Presidencial de 1o. de noviembre de 1928; 100-00-00 Hs. De agostadero para cría de ganado pala la ampliación de ejidos del pueblo de San Mateo Oztzacatipan, según Resolución Presidencial de 19 de julio de 1929; con 46-00-00 Hs. de pastal laborable para la ampliación de

ejidos del pueblo San Cristóbal Huichochitlán según Resolución Presidencial de 7 de mayo de 1935 y con 88-90-00 Hs. de riego y 362-50-00 Hs. de temporal y agostadero laborable para la ampliación de los citados pueblos, según Resolución Presidencial de 4 de noviembre de 1936, cuyas 4 Resoluciones Presidenciales consideraron a la finca que se viene estudiando como de la propiedad de Rafael Barbosa Sucesores, en concepto de que la Resolución Presidencial citada en el último término, integró la pequeña propiedad inafectable con 196-00-00 Hs. de terrenos de temporal y 4-00-00 Hs. ocupadas por construcciones y cuya superficie total coincide con las 200-00-00 Hs. que exactamente arroja planimétricamente el croquis de conjunto informativo.

No obstante lo anterior, con fecha 31 de enero de 1940, el C. Presidente de la República dictó su Resolución en los expedientes de dotación de ejidos a los pueblos de San Diego de los Padres y según ampliación del pueblo San Andrés Cuexcontitlán, ordenando la afectación de esta finca con 96-00-00 Hs. para el primero y 100-00-00 Hs. para el segundo, considerando que la citada Sociedad Rafael Barbosa Sucesores, era propietaria al mismo tiempo de la HACIENDA DE CHINCUA, ubicada en el Estado de Michoacán...debido a la situación creada por un amparo interpuesto por el Síndico de la Liquidación Judicial de la Sociedad Rafael Barbosa Sucesores en contra de las citadas Resoluciones Presidenciales, cuyo amparo fue declarado improcedente por el Juzgado de Distrito y más tarde por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se llegó a la conclusión de que la fecha en que salió del dominio de la Sociedad la HACIENDA DE CHINCUA por adjudicación que de ésta hizo el Juzgado Primero de lo Civil de esta ciudad de Toluca, en rebeldía de la Sociedad, a la Compañía Nacional de Inversiones, era muy anterior a la solicitud de los referidos poblados de San Diego de los Padres y San Andrés Cuexcontitlán, pues mientras aquélla es de 30 de septiembre de 1936, éstas son de 20 y 30 de noviembre del siguiente año, en consecuencia resulta indebido que se le hayan acumulado estas propiedades a la sociedad al resolverse estos expedientes... el H. Cuerpo Consultivo del Departamento del Ramo, en sesión de 31 de octubre de 1940, acordó que las Resoluciones Presidenciales de dotación de San Diego de los Padres y Segunda Ampliación de San Andrés Cuexcontitlán, se ejercitaran en términos hábiles a fin de que la mínima pequeña propiedad correspondiente a la finca de que se trata, se localizaran en términos de la Resolución Presidencial de primera ampliación del poblado citado en último término, cuyo acuerdo fue comunicado a su Delegación en este Estado por oficio número 9912 de 6 de noviembre siguiente... Por otra parte, la Consultoría del Departamento Agrario por el Estado de México, en oficio número 161105 de fecha 29 de diciembre de 1942, transcribió a la misma Delegación el memorandum número 17947 de 27 del mes anterior, en el que comunica el acuerdo celebrado por el C. Presidente de la República y el Titular del Ramo, en el sentido de que las citadas Resoluciones Presidenciales se ejecutaran en términos hábiles a fin de que se respetara la pequeña propiedad a la finca en cuestión, cuyo acuerdo refuerza el anterior del H. Cuerpo Consultivo Agrario.

En acatamiento de lo anterior la Delegación comisionó para el efecto al C. Ignacio Hernández Avila, quien cumplió su cometido el día 26 de febrero siguiente año de 1943, habiéndose dado los avisos de rigor.

Posteriormente el Departamento Jurídico del Departamento Agrario, en telegrama número 2471 de 10 de junio del citado año de 1943 dice a su Delegación en el Estado lo siguiente 'Dirección Tierras y Aguas Este Departamento, el 19 de octubre del año pasado, ordenó esa delegación activar ejecución Resolución Presidencial ampliación de ejidos San Andrés Cuexcontitlán, Municipio de Toluca, ese estado.- Suprema Corte confirmó sentencia Juez de Distrito ese Estado, sobreseyendo amparo interpuesto por J. Filiberto Hernández, Síndico Liquidación Sociedad Rafael Barbosa Sucesores.- Como se tiene que cumplimentar en todos sus términos dicha resolución Ampliatoria, este departamento ha propuesto compensación con terrenos nacionales a dicho síndico...como su Delegación en este Estado ya ha ejecutado en términos hábiles las Resoluciones Presidenciales de que se ha venido hablando según se ha hecho constar en párrafos anteriores, ya no le fue posible acatar las órdenes contenidas en el telegrama inserto en el párrafo anterior, pero de cualquier manera la fina cuestionada ya ha sido reducida a pequeña propiedad inafectable.

PEQUEÑAS PROPIEDADES.- En el croquis informativo correspondiente, se encuentran marcadas diversas pequeñas propiedades las que por sus reducidísimas extensiones superficiales, no se hace ningún estudio de ellas.

CIENEGA DE CHIMALIAPAN.- Esta ciénega es uno de los afluentes del Río Lerma y perteneció a diversos predios y a distintos poblados, pero de acuerdo a lo establecido por el artículo 27 de la Constitución General de la República, esta ciénega paso a ser propiedad del Gobierno Federal.

En el expediente que se estudia se encuentra agregada una escritura debidamente legalizada ante la fe del escribano público Jesús M. Hernández el día 10 de julio de 1909, cuya escritura manifiesta que con el fin de tratar de resolver en forma amistosa las dificultades creadas con motivo de la posesión de la citada ciénega, ya que cada día se profundizaba más la enemistad de los pueblos ubicados en las riveras de la misma a invitación de los señores Antonio R. Barbosa y Enrique G de Salceda, se reunieron en la Hacienda

de Atenco los representantes de los pueblos litigantes o inconformes, acordando en la junta final de que la ciénega de que se trata se repartiera por partes iguales, siempre que tal acuerdo recibiera la aprobación del Supremo Gobierno del Estado, lo que efectivamente acaeció, por lo que se procedió a la expedición de la escritura que se viene citando, la que fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad el 19 de septiembre de 1913, habiendo tocado al poblado que nos ocupa la fracción número 2 con una superficie de 519-04-00 Hs. describiéndose en la escritura los linderos de esa fracción.

Que el poblado Capulhuac, había tenido hondas diferencias con el de San Pedro Tlaltizapán, disputándose la posesión de una parte de la ciénega que nos ocupa, habiendo conocido de este litigio el Juzgado de Primera Instancia de Tenango, cuyo Juzgado dictó un fallo favorable para San Pedro Tlaltizapán, no conformes los de Capulhuac, interpusieron el recurso de apelación ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, pretendiendo que se nulificara la sentencia que se menciona, pero encontrándose el recurso interpuesto, se celebró el convenio ya citado, quedando por lo mismo insubsistente el litigio entablado, ya que cada uno de los poblados tomaron posesión de la parte que les correspondió en la repetida ciénega...”.

- La Comisión Agraria Mixta, pronunció dictamen el dieciocho de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete, resolviendo improcedente la restitución de tierras pero procedente, dotar de tierras, al poblado “Capulhuac”, Capulhuac, Estado de México, concediéndole 514-00-00 (quinientas catorce hectáreas), “...de ciénega, que el poblado que se menciona viene poseyendo desde tiempo inmemorial, cuya superficie está ubicada en la Ciénega de Chimaliapan, afluente del Río Lerma...”.

- El Gobernador del Estado, dictó su Mandamiento el diez de agosto de mil novecientos cuarenta y ocho, ratificando el dictamen de la Comisión Agraria Mixta, el cual fue ejecutado por el Topógrafo Roberto Rayón C., el dos de octubre del referido año, de acuerdo al acta de posesión y deslinde que al efecto levantó y que obra en autos.

- El Delegado del Departamento Agrario, el veintiuno de julio de mil novecientos cincuenta, pronunció informe reglamentario que en su parte medular señala:

“...debe confirmarse en segunda instancia el mandamiento emitido en este asunto por el C. Gobernador del Estado, legalizándole al poblado de Capulhuac, por concepto de dotación definitiva, la superficie de 514-00-00 hs., de ciénega que viene poseyendo desde tiempo inmemorial, cuyos terrenos de destinar para los usos colectivos de los vecinos beneficiados, dejándose a salvo los derechos de los 242 capacitados que arrojó el censo, por falta de terrenos laborables legalmente afectables dentro del radio de siete kilómetros...”

- El seis de abril de mil novecientos sesenta y dos, el Cuerpo Consultivo Agrario, aprobó dictamen declarando improcedente la restitución promovida, al no comprobar la legitimidad y el hecho reclamado, revirtiéndose el procedimiento a la acción de dotación de tierras y confirmaba el mandamiento del Gobernador del Estado, que dotó en provisional al poblado en cuestión con 514-00-00 (quinientas catorce hectáreas), que “... viene poseyendo desde tiempo inmemorial de la Ciénega de Chimaliapan del Río Lerma, designados dichos terrenos para usos colectivos de los beneficiados, dejando a salvo los derechos de los 242 capacitados que arrojó el censo...” y el dieciocho de mayo del mismo año, lo declaró sin efectos, por existir impedimento legal para continuarlo tramitando, debido a los Acuerdos Presidenciales que declararon propiedad de la Nación, los terrenos ubicados en la Laguna de Lerma, y por lo tanto, eran inalienables e imprescriptibles en tanto no se terminen las obras de captación y desecación.

- El Delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria, en el Estado de México, el once de septiembre de mil novecientos noventa y dos, emitió resumen y opinión proponiendo improcedente la restitución de tierras, Aguas y Bosques, solicitada por vecinos del poblado en estudio, al no haber demostrado forma y fecha del despojo de las tierras que denunciaron y negar la acción agraria de dotación de tierras promovida, toda vez que la extensión de 514-00-00 (quinientas catorce hectáreas), de ciénega que se les habían concedido por Mandamiento del Gobernador del Estado, ésta se encontraba comprendida dentro de lo dispuesto por los Decretos Presidenciales de veintiséis de septiembre de mil novecientos veinticuatro, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el treinta y uno de octubre del mismo año, y el del veintiuno de julio de mil novecientos cuarenta y tres, publicada el once de septiembre de ese mismo año, y que para ese entonces, no se habían desincorporado los terrenos a que se refiere el Decreto señalado en segundo término.

- El Cuerpo Consultivo Agrario, aprobó dictamen el trece de octubre de mil novecientos noventa y tres, proponiendo negar la dotación en virtud de que los terrenos solicitados, eran propiedad de la Federación, por Decreto Presidencial y no habían sido desincorporados.

- El Decreto Presidencial de veinticinco de septiembre de mil novecientos veinticuatro, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el treinta y uno de octubre del mismo año, declaró las aguas, el lecho y las riveras de las Lagunas de Lerma en el Estado de México, de propiedad Nacional.

- El Acuerdo Presidencial de veintiuno de julio de mil novecientos cuarenta y tres, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el once de septiembre del mismo año, consideró como reserva para satisfacer necesidades agrarias de poblados aledaños, los terrenos que se cubrieran con motivo de los trabajos de captación, drenaje y desecación de dichas lagunas.

- El Tribunal Superior, el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y tres, radicó el expediente en estudio, registrándolo con el número 1825/93 y el veintidós de junio de mil novecientos noventa y cuatro, aprobó acuerdo plenario el cual medularmente señaló:

“...inicialmente y de modo principal el núcleo de población arriba precisado ejerció su derecho para obtener restitución de tierras; que el procedimiento fue instaurado por la doble vía ejidal de restitución y dotación de tierras para la hipótesis que de resultar improcedente el primero, y que éste a la fecha no ha sido definitivamente resuelto por autoridad competente...como el presente asunto no ha quedado resuelto definitivamente el procedimiento principal, no se cumple con uno de los elementos condicionantes para resolver la acción de dotación de tierras, pues al haberse tramitado como una acción subsidiario, ésta es únicamente susceptible de decidirse definitivamente cuando así ha quedado la de restitución de tierras. Por lo tanto, con copia certificada de esta resolución, remítase el expediente al Tribunal Unitario Agrario del Noveno Distrito, con sede en la Ciudad de Toluca, Estado de México, en quien radica la competencia por materia, grado y territorio, para que decida lo que legalmente corresponda sobre la citada acción de restitución.

En el supuesto de que la sentencia que al efecto se emita se declare improcedente para el núcleo de población solicitante...deberá devolverlo a este órgano jurisdiccional para la emisión del fallo respectivo... Dése de baja este expediente en el libro de Gobierno como asunto totalmente concluido...”

- El Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9, en Toluca, México, el once de mayo de mil novecientos noventa y cinco, pronunció sentencia respecto de la acción de restitución de tierras al poblado “Capulhuac”, cuyos puntos resolutivos son los siguientes:

“...PRIMERO.- Es improcedente la acción de restitución de tierras promovida por los vecinos del poblado Capulhuac, Municipio del mismo nombre.

SEGUNDO.- Se dejan a salvo los derechos de los venció del poblado de Capulhuac, para que continúen haciéndolos valer en el procedimiento de dotación de tierras que se ha venido tramitando simultáneamente con el que corresponde a la acción restitutoria promovida por los interesados.

TERCERO.- Remítase el expediente del caso al Tribunal Superior Agrario, para que resuelva la acción de dotación de tierras en lo conducente...”

- El Tribunal Superior Agrario, por auto de primero de agosto de mil novecientos noventa y cinco, radicó el expediente en estudio, correspondiéndole el número de juicio agrario 183/95.

- El veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y cinco, el Magistrado instructor dictó acuerdo para mejor proveer, por el cual ordenó que se solicitara al Cuerpo Consultivo Agrario, la práctica de trabajos técnicos que determinarían si el poblado solicitante, estaba en posesión de la superficie otorgada por mandamiento Gubernamental, el régimen jurídico de la misma y realizara el levantamiento topográfico correspondiente en el que debería excluir los terrenos considerados Zona Federal; y el Cuerpo Consultivo Agrario, por oficio número 530367, de once de marzo de mil novecientos noventa y seis, remitió los trabajos encomendados de los que se desprende que, fue comisionado el ingeniero Mario González Hernández, quien rindió su informe el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y seis, en los siguientes términos:

“...se procedió a hacer un recorrido por los terrenos que manifiestan tener en posesión, levantándose el acta circunstanciada de la inspección ocular realizada, así como se tomaron fotografías del terreno.

1.- Se hizo la fotoidentificación de la superficie en estudio en virtud de que por estar gran parte de ésta inundada es imposible hacer un levantamiento topográfico en campo, razón por la cual se hizo un levantamiento fotogramétrico apoyado en material adquirido en la Subdirección de Estudio y Consulta del Territorio Estatal, Dirección del Sistema Estatal de Información, Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado de México, como son las ortofotos número 1161, 1162, 1201 y 1202 a escala 1:5000 con fecha de vuelo 1989.

2.- Se hizo el cálculo del levantamiento fotogramétrico realizado, resultando una superficie total de 469-10-19.10 Has., y una superficie con cultivo de 183-02-46.30 Has., con los trabajos ya desarrollados, me permito desahogar lo ordenado en su atento oficio número 3103 de fecha 1 de noviembre de 1995.

1.- Verificar si el poblado de nuestra atención, se encuentra en posesión de la superficie que le fue otorgada por el Mandamiento Gubernamental de fecha 10 de agosto de 1948.

Por mandamiento Gubernamental de fecha 10 de agosto de 1948 y ejecutado el 2 de octubre del mismo año, se conceden tierras al poblado de CAPULHUAC, una superficie de 514-00-00 Has., al poblado de referencia actualmente se encuentra en posesión de una parte de la totalidad de la superficie con cultivos de maíz, ya que el resto de ésta se encuentra inundada la cual no se puede cultivar, pero manifiestan los vecinos que en años anteriores se cultivaba la totalidad de la superficie, esto se observa en el plano elaborado por el suscrito y para mayor ilustración se anexan fotografías tomadas al terreno del cultivo, así como a las zonas inundadas el día de la inspección.

Esta situación también se encuentra asentada en el acta de fecha 17 de enero del presente año, misma que se anexa.

2.- Determinar el Régimen Jurídico de dicha superficie, así como el levantamiento topográfico respectivo, excluyendo aquella que sea considerada como Zona Federal.

Por Decreto Presidencial de fecha 26 de septiembre de 1924, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 31 de octubre de 1924, por el que se declara que las aguas, Lecho y riveras de la Laguna de Lerma son de Propiedad Nacional.

Por Decreto Presidencial de fecha 21 de julio de 1943, publicado en **Diario Oficial de la Federación** el 11 de septiembre del mismo año, en el que señala textualmente que mientras no se hayan concluido las obras de captación, drenaje y desecación y no haga la declaración de que los terrenos ganados o que se descubra, pierdan el carácter de inalienables e imprescriptibles y adquieran el carácter de Nacionales para los efectos del artículo VI de la Ley de Aguas de Propiedad Nacional en vigor.

De acuerdo al plano informativo de las lagunas de Lerma. Laguna Tultepec (Segundo Vaso), Estado de México escala 1:10,000 el cual se construyó con planos de esta Dependencia, así como planos de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (Comisión Nacional del Agua), en el que especifica el límite de las Lagunas de Lerma, y se observa en la parte sur de lo que fue el ejido provisional de CAPULHUAC, existen superficies de 9-30-00 Has., que éstas quedaron consideradas dentro del plano de la posesión provisional a CAPULHUAC y fuera del límite del segundo vaso de Las Lagunas de Lerma...”.

- La Magistratura de instrucción, el diez de junio y catorce de octubre de mil novecientos noventa y seis, pronunció acuerdos para mejor proveer, solicitando a dependencias del Ejecutivo Federal, informes del estado en que se encontraba el trámite de desincorporación de las 7,752-62-60 (siete mil setecientos cincuenta y dos hectáreas, sesenta y dos áreas sesenta centiáreas), pertenecientes a las Lagunas del Lerma, la situación legal de las 514-00-00 (quinientas catorce hectáreas), en posesión del grupo gestor por mandamiento gubernamental y si eran susceptibles de afectación agraria, informando que tal desincorporación no se había llevado a efecto.

- El seis de abril de mil novecientos noventa y ocho, el Magistrado Instructor, pronunció acuerdo para mejor proveer, ordenando que fueran remitidos los autos a la Secretaría de la Reforma Agraria, a efecto de que practicara trabajos de verificación de capacidad agraria individual y colectiva del núcleo peticionario y determinara quiénes eran sus órganos de representación; y, por oficio número UTO/1043/98, de dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y ocho, la Unidad Técnica Operativa, de la Secretaría de la Reforma Agraria, informó que, el comisionado licenciado Alejandro Colmenares Colorado, había rendido informe el treinta de julio del mismo año, señalando que había suspendido los mismos, a petición de los dos grupos existentes en el poblado “Capulhuac”, interesados en la presente acción agraria; así como que por oficio número 805 de la misma fecha, el Representante de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado, pedía que se solicitara a este Tribunal Superior, determinara con cuál de los grupos deberían llevar a cabo los trabajos.

Como consecuencia de lo anterior, por acuerdo de diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve, el Magistrado de instrucción, ordenó girar despacho al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9, con sede en Toluca, Estado de México, a fin de que realizara trabajos que determinaran la capacidad agraria y colectiva del grupo solicitante y se verificara quiénes eran sus órganos de representación, por lo que el comisionado que al efecto se nombrara debería convocar a los grupos interesados en la tramitación de la presente acción agraria.

Por oficio número 2464/2000, de diecisiete de octubre de dos mil, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9, remitió la documentación relativa a los trabajos encomendados, que habían sido realizados por personal del Tribunal citado, apoyado por la Procuraduría Agraria y la Representación Agraria del Estado de México, mismos que habían sido desarrollados de la siguiente forma: el doce de junio de dos mil, se celebró la Asamblea General en la cual fueron electos los órganos de representación del poblado en estudio, censándose en total doscientas sesenta y ocho personas.

- Por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil, el Magistrado Instructor, pronunció acuerdo para mejor proveer, ordenando solicitar al Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, informes del avance en los trámites de desincorporación de los terrenos pertenecientes a las Lagunas del Lerma, y por oficio número DRPCPF.-0002, de ocho de enero de dos mil uno, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, por conducto de la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal, informó lo siguiente:

“...relacionado con el proceso de desincorporación de terrenos localizados dentro de las “Lagunas del Río Lerma”, específicamente de la fracción ocupada por el poblado de Capulhuac, Municipio del mismo nombre en el Estado de México.

Sobre el particular, como es el caso de los poblados de San Mateo Atenco, de Lerma, de San Pedro Tultepec y otros, la citada desincorporación de esos bienes de dominio público de la Federación, no se ha podido llevar a cabo, dada la problemática existente en las 7,752-62-70 Has., que comprende la superficie entregada por la Comisión Nacional del Agua a la Secretaría de Desarrollo Social el 18 de noviembre de 1994, a través de su delegación en ese estado, terrenos que actualmente se encuentran bajo la administración de esta dependencia.

De acuerdo a los señalamientos mencionados en el juicio agrario número 183/95, respecto al asunto que nos ocupa, promovido por el poblado de Capulhuac, existen los mismos problemas que anteriormente me he permitido hacer de su apreciable conocimiento, en el sentido de que la ocupación irregular que hicieron todos los pobladores, ya sea por núcleos ejidales, comuneros y precaristas no ha permitido efectuar ni el procedimiento, ni a favor de quien se podría realizar la desincorporación, además de los cambios a la Ley Agraria y a los antecedentes que usted menciona en su acuerdo, a pesar de los trabajos de carácter interinstitucional celebrados a invitación del Gobierno del Estado de México, con la intervención de dependencias federales y estatales involucradas con este asunto.

Es importante señalar que la irregularidad en la ocupación de los terrenos ganados por la desecación de las lagunas, se inició a través de la delegación en ese estado de la Secretaría de la Reforma Agraria, ya que sin expedientes instaurados se efectuaron dotaciones en la mayor parte de la superficie desecada a los diversos grupos ejidales y comunales, y se realizaron ocupaciones con carácter precario con autorización de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos...

Asimismo, me permito hacer la observación de que el plano enviado con el acuerdo, no reúne las características técnicas necesarias para su aprobación por parte de ésta de mi cargo y tampoco se cuenta con un censo actualizado de los ocupantes.

La Secretaría de la Reforma Agraria hasta esta fecha, a pesar de haberlo solicitado en los años de 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999, nunca no ha informado sobre el estado que guardan las superficies ejidales y comunales ocupadas, lo cual es necesario para poder determinar en un plano la realidad existente desde el punto de vista agrario. También el Gobierno del Estado de México, a través de su Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas necesita determinar la superficie que ocupa la mancha urbana en esta zona federal y finalmente las áreas precariamente ocupadas, que es indispensable determinar en su extensión y características.

Por lo anteriormente señalado, y debido a la suspensión de los trabajos que se realizaban conjuntamente con las dependencias federales y estatales, no ha sido posible establecer ningún procedimiento de desincorporación...”.

- Por escrito de cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, presentado ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, Tomás Ramírez Barón y otros, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en nombre de la totalidad de los integrantes del poblado “Capulhuac”, Municipio de su nombre, Estado de México, en contra de diversas autoridades, cuyo acto reclamado respecto de este Tribunal Superior, fue el de no haber resuelto su expediente de dotación de tierras, correspondiéndole conocer y resolver de la misma al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien admitió el escrito, por proveído de veintidós de noviembre del mismo año, registrándolo con el número 825/99 y resolviendo el once de abril del mismo año; inconformes con la sentencia anterior, los quejosos recurrieron la misma y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el tres de noviembre de dos mil, revocó la sentencia de mérito y ordenó reponer el procedimiento; situación por la cual, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, una vez repuesto el procedimiento, pronunció sentencia el veintiséis de septiembre de dos mil uno, resolviendo amparar y proteger a los amparistas Tomás Ramírez Barón y coagraviados, en representación sustituta del poblado “Capulhuac”, Municipio de Capulhuac, Estado de México, para los efectos de que este Tribunal Superior Agrario, realizara de forma inmediata todas las medidas necesarias para integrar el expediente agrario 183/95 y, en su oportunidad, emita la resolución correspondiente al mismo.

- Por escrito de dieciocho de enero de dos mil dos, el grupo solicitante de tierras por conducto de su Comisariado Ejidal, presentaron alegatos y pruebas que se hacen consistir en su inconformidad respecto de que este Tribunal, no hubiera resuelto su asunto, además no estaban de acuerdo en que se hubieran solicitado a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, informes respecto del procedimiento de desincorporación de terrenos localizados dentro de las lagunas del Río Lerma, además de estimar que se les debían conceder por resolución definitiva las tierras que en su momento el Gobernador del Estado les había otorgado por mandamiento Gubernamental, además señalaban que los terrenos citados, fueron antes de la afectación de carácter particular; por otro lado, manifestaron respecto del informe rendido por el comisionado ingeniero Mario González Hernández, quien llevó a cabo trabajos técnicos informativos complementarios en mil novecientos noventa y seis, que no habían sido desahogados correctamente al señalar que gran parte de la superficie estaba inundada, expresando al respecto que como el poblado "Capulhuac", está ubicado en la parte más baja de la zona:

"...es que una buena parte de las tierras que nos fueron entregadas por mandamiento Gubernamental se cubren de agua en forma variable entre seis u ocho meses del año, según la cantidad de lluvia y la descarga de aguas residuales de poblados de partes más altas. En efecto la inundación temporal de nuestras tierras no obedece solamente a la descarga pluvial, toda vez que todos los poblados que tenemos en partes superiores descargan sus aguas residuales en el Río Acalote (afluente del Río Lerma), el cual atraviesa nuestro ejido, razones éstas por las que en forma variable tenemos inundadas nuestras tierras por un periodo anual de seis a ocho meses.

En las condiciones relatadas durante la época que se encuentra una parte del ejido cubierto por agua, el grupo que representamos obtiene recursos por aprovechamiento cinegético (en la modalidad de casa y aves migratorias), a través de la obtención de permisos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la casería de dichas aves está regulada con la veda vigente. Una vez que termina este lapso la totalidad del ejido se encuentra seco (514-00-00 hectáreas) los terrenos ocupan para el cultivo de hortalizas que requieren únicamente un tiempo de 90 días aproximadamente, entre la siembra la cosecha (cilantro, espinaca y epazote) y las zonas en que la desecación es más rápida, se siembran leguminosas como haba verde y chícharo) cultivos que requieren de 4 a 5 meses para su cosecha..."

Y continuaron manifestando, que los terrenos que les entregaron en forma provisional, no estaban inundados en forma natural, es decir, no se trata de una ciénega, ya que ésta había desaparecido desde hacía treinta y cinco años, y si bien es cierto, por razones de su ubicación en una parte del año, la derrama pluvial, provoca la inundación de una parte de las tierras, ésta se agrava por la descarga de aguas negras de un número importante de poblados de la misma zona, teniendo que practicar trabajos de desazolve y limpieza para hacerlos cultivables, aclarando también que durante la época de lluvias, la inundación y humedad de sus tierras provoca el crecimiento espontáneo del lirio acuático, tule, palma, berros y algunas otras plantas de humedad, las cuales manifiestan, que retiran para preparar los terrenos conforme se van desecando para los cultivos a los que ya hicieron referencia, por lo que esas cuestiones son ajenas a la naturaleza de la Laguna del Lerma, y no guarda relación con las premisas de protección que alude el Decreto del año de mil novecientos veinticuatro, por lo que consideran resultan afectables dichos terrenos para beneficio de los núcleos agrarios, conforme al Decreto de 1943, y por último, manifiestan que el Decreto antes mencionado, establece el requisito que se debe satisfacer, para que los terrenos que ocupan las Lagunas del Río Lerma, sean entregados a los grupos campesinos carentes de tierras, considerando que este Tribunal Superior Agrario, es quien debe determinar el régimen de propiedad al que están sujetos los terrenos desecados del Río Lerma, cuyos trabajos de captación de agua, se realizaron hace cincuenta años, y la desecación tuvo lugar hace treinta; y ofrecieron como pruebas:

1.- Treinta y cinco fotografías, presuntamente de los terrenos que tienen en posesión por Mandamiento Gubernamental.

2.- Oficio número PMC/150/01/2002, de once de enero de dos mil dos, expedido por el ingeniero Benjamín Aguilar García, Síndico Municipal del Ayuntamiento de Capulhuac, Estado de México, dirigido al Magistrado Presidente este Tribunal Superior, por medio del cual hace constar que los integrantes del ejido "Capulhuac", año con año practican trabajos de desazolve y saneamiento en el Río Acalote que pasa por tal ejido con el fin de prevenir y evitar inundaciones en época de lluvias que dañen los cultivos de maíz y hortalizas que realizan en los terrenos que poseen desde tiempos inmemoriales, manifestando además que es el ejido que aporta forraje para ganado, maíz y hortalizas que consume la población.

3.- Contrato de prestación de servicios, firmados por el Síndico Procurador Municipal, ingeniero Benjamín Aguilar García, celebrado entre el Ayuntamiento de Capulhuac y Juan Gil Armas, de veintiséis de marzo de dos mil uno, por medio del cual el segundo de los citados se compromete a realizar trabajos de desazolve en el Río Acalote, y el Ayuntamiento Constitucional de Capulhuac se compromete a pagarle por sus servicios \$25,000.00 (veinticinco mil pesos).

4.- Contrato de prestación de servicios, firmado por el Presidente Municipal de Capulhuac, México, el Síndico Procurador Municipal y el Secretario del Ayuntamiento, celebrado entre el Ayuntamiento Constitucional de Capulhuac y Juan Gil Armas, de diecinueve de mayo de dos mil uno, por medio del cual el segundo de los citados se compromete a realizar trabajos de desasolve en el Río Acalote, y el Ayuntamiento Constitucional de Capulhuac se compromete a pagarle por sus servicios \$25,000.00 (veinticinco mil pesos).

5.- Contrato de prestación de servicios, firmado por el Presidente Municipal de Capulhuac, Síndico Procurador Municipal, y Juan Gil Armas, celebrado entre el Ayuntamiento Constitucional de Capulhuac y el último de los citados, de dos de agosto de dos mil uno, por medio del cual el segundo de los citados se compromete a realizar trabajos de desasolve en el Río Acalote, y el Ayuntamiento Constitucional de Capulhuac se compromete a pagarle por sus servicios \$25,000.00 (veinticinco mil pesos).

6.- Recibo de pago de derechos realizado por Tomás Ramírez Barrón, de dieciséis de noviembre de dos mil uno, ante la Secretaría de Hacienda, que comprende el periodo de noviembre de dos mil uno a marzo de dos mil dos, por la cantidad de \$18,240.00 (dieciocho mil doscientos cuarenta pesos) a favor de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, por el permiso de aves acuáticas (40 cintillos, costo unitario \$150.00) y derecho de aprovechamiento de caza (40x304).

7.- Oficio número DEFMARNAE/SMA/F4802/250/2000, de veintisiete de septiembre de dos mil, firmado por el Delegado Federal de Medio Ambiente en el Estado de México, de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, por medio del cual se otorga el registro para el establecimiento de una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, por tres años a nombre de Tomás Ramírez Barrón, con domicilio en el ejido Capulhuac, Municipio de Capulhuac, registrando como nombre de la unidad de manejo (UMA) el ejido Capulhuac, autorizando una superficie de 120-00-00 (ciento veinte hectáreas) reconociendo como calidad de los terrenos, ejidal y estableciendo como la finalidad de ésta, la conservación y manejo de vida silvestre de las siguientes especies: pato triguero, pato golondrina, pato cola prieta o pato pinto, pato cuchara o bocón, pato chalcuan o panadero, pato cuacoxtle, pato cabeza roja, pato boludo chico, pato tepalcate, cerceta café o canela, cerceta alas verdes, ceceta alas azules, ganga, gallareta y agachona.

8.- Veintiún cláusulas de operación de la Unidad de Manejo para la conservación de la vida silvestre (UMA).

- Este Tribunal Superior Agrario, por acuerdo plenario de siete de febrero de dos mil dos, y en cumplimiento a la ejecutoria precisada en el párrafo anterior, determinó:

“...PRIMERO.- Con copias certificadas de la ejecutoria y del presente acuerdo, gírese oficio recordatorio al Director General del Patrimonio Inmobiliario Federal de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, a efecto de que se sirva dar cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo para mejor proveer de veintidós de noviembre del 2000, dictado por el Magistrado Instructor en el juicio agrario 186/95, proveído que se hizo de su conocimiento mediante oficio SIP/2941/00, DEL VEINTICUATRO DEL MISMO MES Y AÑO.

SEGUNDO.- Túrnese al Magistrado Ponente copias certificadas del presente acuerdo y de la ejecutoria a la que se está dando cumplimiento, para que una vez que las Dependencias requeridas remitan la documentación que acredite el cumplimiento dado al acuerdo para mejor proveer del diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve, formule el proyecto de sentencia correspondiente, y lo someta a la aprobación del Pleno de este Tribunal Superior.

TERCERO.- Con copias del presente acuerdo y constancias que obran en el expediente respectivo, a partir del diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve, notifíquese por oficio al Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, a fin de acreditar las gestiones realizadas por el Tribunal Superior Agrario, tendientes a dictar sentencia definitiva en el juicio agrario 183/95 y a cumplimentar la ejecución pronunciada en el juicio de amparo 825/99...”

- En cumplimiento al acuerdo plenario anteriormente citado, el licenciado Vicente Anaya Cadena, Director General del Patrimonio Inmobiliario Federal, por oficio número D.DS.-4161/2002, registro 202004426, de quince de julio de dos mil dos, recibido el primero de agosto del mismo año, por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Tribunal Superior Agrario, y dirigido al licenciado Ernesto Jiménez Navarrete, manifestó:

“...Me refiero a los terrenos de propiedad federal con superficie de 7,752-62-60 Has., que fueron ganados a las “Lagunas de Lerma”, en el estado de México, y concretamente con aquella extensión con área de 514-00-00 Has., que conforma el poblado denominado Capulhuac, Municipio del mismo nombre, en la citada Entidad Federativa, quien tiene instaurado ante ese alto Tribunal, el juicio agrario No.183/95, sobre dotación de tierras, en el que se encuentra pendiente, dictar la resolución respectiva.

Sobre el particular y para los efectos que juzgue conveniente ese órgano jurisdiccional, con el presente le proporciono copia del oficio 20602A/1126/02 de 27 de junio de 2002, recibido en esta Dirección General vía fax, el 4 de los corrientes, donde el Arq. Víctor Manuel Chávez Alvarado, Director General de Operación Urbana, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del referido poblado, se localiza en áreas no urbanizables y fuera de los límites que comprende el Plan de Centro de Población Estratégico de Lerma, así como el correspondiente al citado poblado, teniéndose considerada a dicha superficie, por la Secretaría de Ecología del estado de México, como cuerpo de agua dentro de las de riego, además de estar contemplada en el proyecto de creación de áreas de protección a la flora y fauna del lugar, mediante la recuperación de las Lagunas, la cuales se pretenden inundar parcialmente...”

Acompañando a su oficio el oficio citado, dirigido al licenciado Luis Miranda Nava, Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, que firma el arquitecto Víctor Manuel Chávez Alvarado, Director General de Operación Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de México, en copia, el cual señala:

“...OFICIO No.20602A/1126/02

LIC. LUIS E. MIRANDA NAVA
SUBSECRETARIO DE ASUNTOS JURIDICOS
DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
P R E S E N T E.

En atención a su oficio No. SGG/SAJ/983/2002, de fecha veintiocho de abril de dos mil dos, mediante el cual solicita ante el C. Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, se le informe sobre los usos del suelo que en base al Plan de Centro de Población Estratégico correspondiente, tienen asignados unos terrenos con una superficie de 514-00-00 has., con el objeto de que el Tribunal Superior Agrario esté en aptitud de resolver un juicio agrario promovido por pobladores de la zona de Lerma en contra de diversas autoridades federales; al respecto me permito comunicarle que del análisis del plano anexado, se encontró que estos terrenos se localizan en una zona considerada como área no urbanizable, fuera de los límites comprendidos tanto del Plan de Centro de Población Estratégico de Lerma, como de los planes de Ocoyoacac, Capulhuac, Tianguistenco y San Mateo Atenco, la cual en base a la información proporcionada por la Secretaría de Ecología del Estado de México, está considerada como un cuerpo de agua, dentro de las ciénegas de alto Lerma, donde no se permite ningún uso del suelo por ser una zona de riesgo, además de estar contemplada en el proyecto de creación de áreas de protección a la flora y fauna, mediante la recuperación de las lagunas del río Lerma, las cuales de pretenden inundar parcialmente.

ATENTAMENTE

ARQ. VICTOR MANUEL CHAVEZ ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE OPERACION URBANA...”

- El Magistrado Instructor, el diecinueve de septiembre de dos mil dos, dictó acuerdo para mejor proveer, en el sentido de que:

“...En virtud de lo expuesto y en cumplimiento de la ejecutoria citada, con fundamento en los artículos 186 y tercero transitorio último párrafo de la Ley Agraria, se considera procedente solicitar al licenciado Francisco Barrio Terrazas, Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, informes respecto de todo lo relacionados con el procedimiento de desincorporación de los terrenos de propiedad federal con superficie de 7,752-62-60 hectáreas, que fueron ganados a las Lagunas del Lerma en el Estado de México, haciéndole de su conocimiento que los datos que se le requiere son esenciales para que este Tribunal Superior, cuente con los antecedentes necesarios para estar en condiciones de dictar en su caso la sentencia que conforme a derecho corresponde en el juicio agrario 183/95, relativo a la dotación de tierras al poblado “Capulhuac”, Municipio de su nombre Estado de México...”

- El Director General de Patrimonio Inmobiliario Federal, licenciado Vicente Anaya Cadena, por oficio número D.DEC./2002, REG: 202007895, de once de noviembre de dos mil dos, dirigido al Director General de Asuntos Jurídicos de este Tribunal Superior Agrario, recibido al día siguiente y registrado con el número 04016; en cumplimiento al acuerdo de diecinueve de septiembre del presente año señaló:

“...Me refiero a los terrenos de propiedad federal con superficie de 7,752-62-60 Has., que fueron ganados a las “Lagunas de Lerma”, en el estado de México, y concretamente a los que conforma el poblado denominado Capulhuac, Municipio del mismo nombre, en la citada Entidad Federativa, con área de 514-00-00 Has., quien tiene instaurado ante ese Alto Tribunal, el juicio agrario No.183/95, sobre dotación de tierras, en el que se encuentra pendiente, dictar la resolución respectiva.

Sobre el particular y derivado del proveído de 24 de octubre de este año, donde el C. Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, dispone se informe sobre la respuesta que recayó al acuerdo de 19 de septiembre del presente año, dictado por el C. Magistrado Instructor de ese órgano jurisdiccional, solicitando del Titular de esta Dependencia del Ejecutivo Federal, se le dé a conocer respecto de todo lo relacionado con el procedimiento de desincorporación de los terrenos de Lagunas de Lerma en el estado de México, a efecto de estar en condición de dictar la sentencia que conforme a derecho proceda, en el junco agrario 183/95, relativo a la dotación de tierras al poblado "Capulhuac", Municipio del mismo nombre en el Estado de México, manifiesto a usted lo siguiente:

La totalidad de los terrenos que nos ocupa, presentan una problemática sumamente compleja, motivo por el cual se han estado llevando a cabo pláticas con representantes de la Secretaría de la Reforma Agraria, de la Comisión Nacional del Agua y del Gobierno del Estado de México, a quien se le ha pedido su coadyuvancia en la solución de tal problemática, a efecto de establecer la estrategia a seguir y poder ejecutar las acciones que conforme a derecho procedan, para lograr que a dichos terrenos, se les dé el uso mas adecuado y mejor aprovechamiento posible.

No obstante lo anterior, una vez más hago de su conocimiento que a juicio de esta Dirección General, ese Alto Tribunal, para dictar una resolución sobre terrenos federales, ya sea de tierras, como es el caso del poblado de "Capulhuac", Municipio del mismo nombre en el estado de México, ampliación o restitución de tierras para ejidos o comunidades, no requiere de que estos terrenos sean desincorporados previamente, lo que le fue dado a conocer en el diverso D.DEC.-1539/2002 de 18 de marzo del presente año, del que para mejor proveer, le acompañó, del que le envió un tanto, esta Unidad Administrativa, también hizo de su conocimiento para los efectos a que hubiere lugar, la situación de la superficie de 514-00-00 Has., dentro de la que se localiza el citado poblado de "Capulhuac", anexando a dicho curso, copia del oficio 20602^a/1126/02 de 27 de junio último, del que también le acompaño copia, donde el Director General de Operación Urbana, dependiente de la Secretaría de Desarrollo y Obras Públicas del Gobierno del Estado de México, informa la situación de dichos terrenos.

Lo anterior, a efecto de que ese órgano jurisdiccional, esté en condición de que tomando en cuenta el tipo de terrenos en que se ubica el poblado de referencia, el estado procedimental de la desincorporación de la totalidad de aquellos que conforman las Lagunas de Lerma y, que sobre los mismos o de cualesquiera que aún siendo propiedad del Gobierno Federal, fuere necesario que ese Tribunal tuviere que dictar una resolución, no se requeriría de su previa desincorporación, para la afectación de los mismos..."

- Este Tribunal el seis de diciembre de dos mil dos, pronunció sentencia en el juicio agrario que nos ocupa, en cumplimiento a la ejecutoria del Juez Sexto de Distrito, en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el veintiséis de septiembre de dos mil uno, en el juicio de amparo directo 825/99, promovido por representantes del núcleo agrario, resolviendo modificar el mandamiento del Gobernador del Estado de México, de diez de agosto de mil novecientos cuarenta y ocho, y conceder al poblado "Capulhuac" Municipio de su nombre, Estado de México, por concepto de dotación de tierras, 192-32-46.30 (ciento noventa y dos hectáreas, treinta y dos áreas, cuarenta y seis centiáreas, treinta miliáreas), que se tomarían del predio denominado "Ciénega de Chimaliapan" de propiedad Federal, para beneficiar a ciento sesenta y cuatro campesinos capacitados.

- El grupo solicitante, por conducto de su entonces Comité Particular Ejecutivo, interpuso demanda de amparo, el cual conoció y resolvió el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el juicio de amparo 295/2003, quien otorgó la protección constitucional, a fin de que este Tribunal Superior, dejara insubsistente la sentencia reclamada y practicara los trabajos técnicos y las diligencias necesarias con la cuales se pudiera determinar si las 322-00-00 hectáreas que inicialmente habían sido dotadas al ejido, por mandato del ejecutivo del Estado de México, era posible se tomaran de los terrenos a que se refiere el Decreto Presidencial de veintiuno de junio de mil novecientos cuarenta y tres, publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, el once de septiembre del mismo año, y aptas para destinarse a satisfacer sus necesidades agrarias, en el entendido de que la declaratoria de procedencia "...de la acción de dotación de tierras y la concesión al poblado solicitante de una superficie de ciento noventa y dos hectáreas, treinta y dos áreas, cuarenta y seis centiáreas, treinta miliáreas, que serán tomadas de la Ciénega de Chimaliapan, por no ser materia de la litis en el presente juicio de garantías, deben quedar intocadas y reiterarse en la nueve resolución, sin perjuicio de que con motivo de los nuevos trabajos, técnicos y diligencias que ordene practicar el Tribunal agrario responsable por virtud del amparo que se concede, decida que al poblado quejoso le corresponde una superficie mayor a la que ya determinó..."

- Este Tribunal Superior Agrario, el veintisiete de abril de dos mil cuatro, emitió acuerdo plenario, dejando insubsistente la sentencia de seis de diciembre de dos mil dos, pronunciada en el juicio agrario 183/95, relativa a la dotación de tierras al poblado en estudio, recalcando que al dictarse la sentencia en cumplimiento de ejecutoria, se debería reiterar la afectación de las 192-32-46.30 (ciento noventa y dos hectáreas, treinta y

dos áreas, cuarenta y seis centiáreas, treinta miláreas), sin perjuicio de que como resultado de los trabajos técnicos que se realizarían resultara afectable una mayor superficie, y ordenó el turno de los autos al Magistrado Instructor, para su trámite subsecuente.

- El Magistrado Instructor, el ocho de junio de dos mil cuatro, pronunció acuerdo para mejor proveer por medio del cual ordenó girar despacho al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9, con sede en la ciudad de Toluca, Estado de México, a fin de que comisionara a la brigada de ejecución adscrita al mismo, para los efectos de que previa notificación a los interesados integrantes del Comisariado Ejidal del poblado en estudio, al Delegado Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de México y a la Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado de México, se realizaran los trabajos técnicos y las diligencias necesarias para determinar si con motivo de la conclusión de las obras de que se refiere el Decreto Presidencial de veintiuno de julio de mil novecientos cuarenta y tres, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el once de septiembre del mismo año, se descubrieron terrenos para ser destinados a las necesidades agrarias del poblado quejoso y de existir terrenos de presunta afectación, determinar si las restantes trescientas veintidós hectáreas de las que inicialmente se dotó al ejido, por mandato del Ejecutivo del Estado de México, pueden ser tomadas de los terrenos de referencia.

SEXTO. Por escrito de dieciocho de junio de dos mil cuatro, Rubén Rodríguez Velez, Magdalena Berriosabal Rojas y Angel Tecontero Pulido, presentado ante este Tribunal Superior Agrario, en la misma fecha manifestaron que al mismo acompañaban la documentación con la cual acreditaban su personalidad como integrantes del Comisariado Ejidal del poblado "Capulhuac" Municipio de su nombre, Estado de México; personalidad que se les tuvo por reconocida por acuerdo de veinticuatro del mismo mes y año.

SEPTIMO. El Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9, en cumplimiento al acuerdo para mejor proveer señalado en el resultando sexto de esta sentencia, el siete de octubre de dos mil cuatro, remitió el oficio número T.U.A.09/2237/2004, acompañado de las documentales derivadas de las actuaciones del mismo, consistentes en:

1.- Informe de seis de octubre de dos mil cuatro, la brigada de ejecución adscrita al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9, licenciado Isaías Gutiérrez Narváez, actuario ejecutor e ingeniero Daniel Cárdenas Téllez, perito topógrafo, mismo que en su parte medular señala:

"...LOS QUE SUSCRIBEN LIC. ISAIAS GUTIERREZ NARVAEZ E ING. DANIEL CARDENAS TELLEZ, ACTUARIO EJECUTOR HABILITADO Y PERITO TOPOGRAFO, INTEGRANTES DE LA BRIGADA DE EJECUCION ADSCRITA AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO NUMERO 9, CON SEDE EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, EN ATENCION AL ACUERDO DE FECHA DOS DE AGOSTO DEL DOS MIL CUATRO, QUE A LA LETRA DICE "téngase por recibido el despacho D.A. 49/2004. en consecuencia pasen los autos a la Brigada adscrita a este Tribunal; para que en auxilio de las labores del Tribunal Superior Agrario, lleve a cabo los trabajos técnicos y diligencias necesarias para determinar si con motivo de la conclusión de las obras de que se refiere el decreto presidencial de veintiuno de junio de mil novecientos cuarenta y tres, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el once de septiembre del mismo año, se descubrieron terrenos para ser destinados a las necesidades agrarias del poblado quejoso, y de existir terrenos de presunta afectación, determinar si las restantes 322 hectáreas de las que inicialmente se dotó al ejido, por mandato del ejecutor del Estado de México, pueden ser tomadas de los terrenos de referencia. hecho lo anterior, remítase a su lugar de origen" .

Así LAS COSAS, EL DIA CINCO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, NOS TRASLADAMOS AL POBLADO CITADO AL RUBRO, EN BUSCA DE LOS INTEGRANTES DEL COMISARIADO EJIDAL, A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO ARRIBA CITADO y PREVIA NOTIFICACION, LOS ENCONTRAMOS PRESENTES Y PROCEDIMOS A EXPLICARLES EL MOTIVO DE NUESTRA PRESENCIA, A LO QUE NOS INFORMARON QUE PARTE DE LOS TERRENOS Y CAMINOS DE ACCESO SOBRE LOS CUALES SE TIENE QUE TRABAJAR SE ENCUENTRAN ANEGADOS ESTO ES INUNDADOS; POR LO QUE NO OBSTANTE LO ANTERIOR NOS TRASLADAMOS A LOS TERRENOS PARA CORROBORAR LO DICHO POR LOS INTEGRANTES DEL COMISARIADO EJIDAL, QUIENES NOS ACOMPAÑARON A TODO EL RECORRIDO POSIBLE, QUE EN LA MAYORIA DE LAS AREAS LLEGAMOS CAMINANDO POR LO INUNDADO DE LOS ACCESOS, CORROBORANDO ASI LA INFORMACION DADA y TOMANDO PLACAS FOTOGRAFICAS DE LOS DIFERENTES PARAJES OBJETO DE LA DILIGENCIA ORDENADA, ESTO SE HIZO POR EL LADO SURESTE DEL POLIGONO, EN VIRTUD QUE A LA OTRA PARTE DEL TERRENO ES IMPOSIBLE INGRESAR, POR LO QUE POSTERIORMENTE SE LEVANTO ACTA CIRCUNSTANCIADA ANTE LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL PARA DAR LEGAL CUMPLIMIENTO, HACIENDO NOTAR QUE LAS AREAS DONDE SE TOMARON LAS FOTOGRAFIAS ES DONDE HAY MENOS AGUA, PUES ELLOS MISMOS MANIFIESTAN TAL y COMO CONSTA EN EL ACTA QUE PARA LLEGAR A LA MOJONERA CENTRAL SOLO SE PODRIA HACER CON CANOA O LANCHA, PUES ES LA PARTE MAS INUNDADA, SIENDO ESTE UN PUNTO PRINCIPAL PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS ORDENADOS, DANDO Así CABAL CUMPLIMIENTO A LA COMISION CONFERIDA.

LO QUE SE HACE DE SU CONOCIMIENTO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR..."

2.- Acta Circunstanciada, levantada en los siguientes términos:

“...EN EL POBLADO DE CAPULHUAC ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS ONCE HORAS DEL DIA CINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DE DOS MIL CUATRO, LOS SUSCRITOS LICENCIADO ISAIAS GUTIERREZ NARVAEZ E INGENIERO DANIEL CARDENAS TELLEZ, ACTUARIO EJECUTOR Y PERITO TOPOGRAFO, AMBOS DE LA BRIGADA DE EJECUCION ADSCRITA AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO NUEVE CON SEDE EN TOLUCA MEXICO; NOS CONSTITUIMOS EN EL POBLADO PREVIA NOTIFICACION CON LOS C.C. RUBEN RODRIGUEZ VELEZ, MAGDALENA BERRIOZABAL ROJAS Y ANGEL TECONTERO PULIDO, PRESIDENTE SECRETARIO Y TESORERO DEL EJIDO CAPULHUAC, A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE FECHA DOS DE AGOSTO DEL DOS MIL CUATRO, DICTADO POR EL TRIBUNAL DE ADSCRIPCION CON BASE AL ACUERDO DE FECHA OCHO DE JUNIO DEL MISMO AÑO DICTADO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR, ASI BIEN UNA VEZ CONSTRUIDOS EN EL POBLADO Y UNA VEZ QUE SE EXPLICO EL MOTIVO DE NUESTRA PRESENCIA, LOS INTEGRANTES DEL COMISARIADO COMENTARON QUE LOS TERRENOS SOBRE LOS CUALES SE TIENEN QUE MEDIR E IDENTIFICAR, SE ENCUENTRAN ANEGADOS; NO OBSTANTE LO ANTERIOR NOS TRASLADAMOS A LOS TERRENOS INICIANDO EL RECORRIDO POR EL CAMINO QUE LLAMAN CARRIL DOS QUE CONDUCE A LA MOJONERA CENTRAL; PERCATANDONOS QUE NO EXISTE PASO POR QUE ESTAN INUNDADAS LAS TIERRA EN ESTE MOMENTO PARA LO CUAL Y A EFECTO DE ILUSTRAR A LA SUPERIORIDAD SE TOMAN VARIAS PLACAS FOTOGRAFICAS DEL LUGAR, ACTO CONTINUO NOS TRASLADAMOS AL CARRIL NUMERO UNO, MISMO QUE TAMBIEN ESTA INUNDADA INCLUSO SE HACE NOTAR QUE EL VEHICULO NO LLEGO AL LUGAR EN DONDE NOS UBICAMOS Y TOMAMOS PLACAS FOTOGRAFICAS, HACIENDO NOTAR QUE TAMPOCO EXISTE ACCESO POR LO INUNDADO DE LOS TERRENOS; ASI BIEN NOS TRASLADAMOS A OTRA AREA DENOMINADA CARRIL CINCO, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES DE INUNDACION, TOMANDO PLACAS FOTOGRAFIAS DE LOS TERRENOS Y POR MANIFESTACION DE LOS INTEGRANTES DEL COMISARIADO LAS DEMAS AREAS ESTAN INACCESIBLES TANTO QUE PARA LLEGAR A LA MOJONERA CENTRAL SOLO SE PODRIA CON CANOA O LANCHA, Y REFIEREN QUE TODO ESTO POR SER LA TEMPORADA DE LLUVIAS, ACLARANDO LOS PRESENTES QUE LOS CAMINOS DE ACCESO Y ALGUNOS TERRENOS SON LOS QUE ESTAN INUNDADOS, Y EN CUANTO AL CARRIL DOS EL DE LA VOZ ASENTE QUE CONDUCE A LA MOJONERA CENTRAL Y NO ES ASI SINO QUE ES UN CAMINO QUE ATRAVIESA EL EJIDO DE ORIENTE A PONIENTE, ESTANDO LA MOJONERA CENTRAL EN LA PARTE NORTE, A LA CUAL NO SE TUVO ACCESO POR LO INUNDADO DE TODOS LOS ACCESOS; POR LO QUE ANTE LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS TECNICOS INFORMATIVOS; SE LEVANTA LA PRESENTE PARA CONSTANCIA LEGAL, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN QUIENES NOS ACOMPAÑARON AL RECORRIDO Y PREVIA LECTURA DE LA MISMA. DOY FE.

3.- Veintiún fotografías, de la diligencia de cinco de octubre de dos mil cuatro, en las cuales hay manifestaciones de los comisionados “...los integrantes de Comisariado Ejidal los accesos a los puntos de colindancia, a los terrenos objeto de la diligencia...”; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos tercero transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** del seis de enero de mil novecientos noventa y dos; tercero transitorio de la Ley Agraria; 1o., 9o. fracción VIII y cuarto transitorio fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

SEGUNDO. Esta sentencia se emite en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en México, Distrito Federal, el seis de febrero de dos mil cuatro, en el juicio de amparo directo número D.A.-295/2003, promovido por Tomás Ramírez Barón y otros, en nombre de la totalidad de los integrantes del poblado “Capulhuac”, Municipio Capulhuac, Estado de México, que concedió el amparo a los quejosos, para el efecto de que este Tribunal Superior, dejara insubsistente la sentencia reclamada y practicara los trabajos técnicos y las diligencias necesarias con las cuales se pudiera determinar si las 322-00-00 (trescientas veintidós hectáreas) que inicialmente habían sido dotadas al ejido, por mandato del Ejecutivo del Estado de México, era posible se tomaran de los terrenos a que se refiere el Decreto Presidencial de veintiuno de junio de mil novecientos cuarenta y tres, publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, el once de septiembre del mismo año, y aptas para destinarse a satisfacer sus necesidades agrarias.

Es de hacer notar, que la ejecutoria a la que se está dando cumplimiento, como se desprende de los resultandos, estableció lo siguiente: “...En el entendido de que la declaratoria de procedencia de la acción de dotación de tierras y la concesión al poblado solicitante de una superficie de ciento noventa y dos hectáreas, treinta y dos áreas, cuarenta y seis centiáreas, treinta miláreas, que serán tomadas de la Ciénega de Chimaliapan, por no ser materia de la litis en el presente juicio de garantías, deben quedar intocadas y reiterarse en la nueve resolución, sin perjuicio de que con motivo de los nuevos trabajos, técnicos y diligencias que ordene practicar el Tribunal agrario responsable por virtud del amparo que se concede, decida que al poblado quejoso le corresponde una superficie mayor a la que ya determinó...”

TERCERO. Respecto a la capacidad agraria individual de los solicitantes y colectiva del grupo promovente, no ha lugar a su estudio, pues éstas fueron acreditadas en la sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil uno, que determinó la existencia de ciento sesenta y cuatro campesinos con capacidad agraria, sobre todo porque las diligencias censales no se objetaron, por lo tanto, se estima que la citada sentencia se encuentra firme en este punto, y por la misma razón y en estricto cumplimiento a la ejecutoria a la cual se le está dando cumplimiento, también está firme la determinación alcanzada a la sentencia de mérito, respecto de las 192-32-46.30 (ciento noventa y dos hectáreas, treinta y dos áreas, cuarenta y seis centiáreas, treinta miláreas), de propiedad Federal de la "Ciénega de Chimaliapan", que beneficiaran a ciento sesenta y cuatro campesinos capacitados.

CUARTO. Para dar debido cumplimiento a la ejecutoria aludida, se procede a analizar las constancias que obran en los autos del juicio agrario número 183/95.

1.- Por Resolución Presidencial de diez de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno, publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, el veintisiete de noviembre del mismo año, se declaró improcedente la restitución de tierras, promovida por campesinos del poblado en estudio, al no haberse comprobado la fecha y forma del despojo de las mismas, habiéndose declarado apócrifos los títulos presentados.

2.- Por escrito de treinta de mayo de mil novecientos cuarenta y cuatro, campesinos del poblado "Capulhuac", Capulhuac, Estado de México, solicitaron de nueva cuenta restitución de los terrenos que amparaban sus títulos primordiales, y en caso de que no prosperara dicha acción, se revirtiera a dotación de tierras; la Comisión Agraria Mixta, instauró el procedimiento respectivo el primero de julio de mil novecientos cuarenta y cuatro, con el número 1/1157 y fue publicada la solicitud referida en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado, el veinticuatro de junio del mismo año; el Comité Particular Ejecutivo designado quedó integrado por Octaviano Enríquez, Florentino Peña y Bartolo Barón, como Presidente, Secretario y Vocal respectivamente, expidiéndoseles sus nombramientos, el diecinueve de junio de mil novecientos cuarenta y cuatro.

4.- Por oficio número 195, de diecisiete de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, fue comisionado Enrique L. Téllez, para la práctica de los trabajos censales, quien rindió su informe el treinta de octubre del mismo año, del cual se conoce que resultaron doscientos cuarenta y dos capacitados, según junta censal celebrada del diecisiete al veinticinco de octubre del citado año.

5.- Por oficio número 1131, de veintiocho de octubre de mil novecientos cuarenta y siete, fue comisionado Efrén Espinosa Hernández, para que realizara trabajos técnicos informativos; comisionado que rindió su informe el veintiséis de noviembre del mismo año, indicando que había inspeccionado las haciendas de Tlaxcaltenco, Texcalpan y Atenco, la Ciénega de Chimaliapan y pequeñas propiedades, encontrando a los petitionarios en posesión de 514-00-00 (quinientas catorce hectáreas), de la Ciénega de Chimaliapan, afluente del Río Lerma, propiedad del Gobierno Federal.

6.- El dieciocho de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete, la Comisión Agraria Mixta, pronunció dictamen en el sentido de declarar improcedente la acción de restitución de tierras, pero procedente dotar de tierras, al poblado petitionario con 514-00-00 (quinientas catorce hectáreas), de la Ciénega de Chimaliapan, afluente del Río Lerma, para usos colectivos de los doscientos cuarenta y dos capacitados.

7.- El Gobernador del Estado, dictó Mandamiento el diez de agosto de mil novecientos cuarenta y ocho, confirmando en todos sus términos el dictamen de la Comisión Agraria Mixta, siendo ejecutado el mismo por el topógrafo Roberto Rayón C., el dos de octubre del referido año.

8.- El Delegado Agrario en el Estado de México, pronunció informe reglamentario el veintiuno de julio de mil novecientos cincuenta, opinando que debía confirmarse el Mandamiento del Gobernador del Estado, legalizándole al poblado gestor las 514-00-00 (quinientas catorce hectáreas), que poseían desde tiempo inmemorial, para usos colectivos de los beneficiados, dejando a salvo los derechos de los doscientos cuarenta y dos capacitados, por falta de tierras laborables afectables.

9.- El Cuerpo Consultivo Agrario, por dictamen de seis de abril de mil novecientos sesenta y dos, declaró improcedente la acción restitutoria, procedente la acción de dotación de tierras y propuso confirmar el Mandamiento del Gobernador del Estado, pero por acuerdo de dieciocho de mayo del mismo año, dejó sin efectos el dictamen citado al inicio del párrafo, por el impedimento legal para continuar su trámite, debido a los Acuerdos Presidenciales de veintinueve de diciembre de mil novecientos veintiuno, publicados en el **Diario Oficial de la Federación**, el dieciséis de febrero y treinta y uno de octubre de mil novecientos veintidós, y el once de septiembre de mil novecientos cuarenta y tres, en los que se declararon propiedad de la Nación, los terrenos de la Laguna de Lerma, mismos que permanecerían inalienables e imprescriptibles, hasta que finalizaran las obras de captación y desecación señaladas en los decretos, que dejarían al descubierto terrenos para aprovechamiento agrícola, que resolverían las necesidades agrarias de poblados citados en los decretos.

10.- El Delegado Agrario en el Estado de México, emitió su resumen y opinión, el once de septiembre de mil novecientos noventa y dos, proponiendo por un lado improcedente la restitución solicitada por el grupo promovente, al no acreditarse la forma y fecha del despojo de las tierras y por otro lado, propuso negar la dotación de tierras, ya que las 514-00-00 (quinientas catorce hectáreas), concedidas por Mandamiento del Gobernador del Estado, estaban dentro de los terrenos señalados en los decretos presidenciales ya citados, los cuales no habían sido desincorporados; dejando a salvo los derechos de los capacitados, para que los hicieran valer conforme a sus intereses.

11.- El Cuerpo Consultivo Agrario, aprobó nuevo dictamen negativo, el trece de octubre de mil novecientos noventa y tres, ya que los terrenos solicitados eran propiedad de la Federación, según Decretos Presidenciales y no habían sido desincorporados.

12.- El Decreto Presidencial de veinticinco de septiembre de mil novecientos veinticuatro, publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, el treinta y uno de octubre del mismo año, declaró las aguas, el lecho y las riveras de las Lagunas del Lerma en el Estado de México, de propiedad nacional.

13.- Este Tribunal Superior Agrario, el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y tres, radicó el expediente con el número 1825/93, y por acuerdo plenario de veintidós de junio de mil novecientos noventa y cuatro, ordenó la remisión del mismo al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9, con Sede en Toluca, Estado de México, para que conociera de la acción restitutoria, quien el once de mayo de mil novecientos noventa y cinco, pronunció sentencia declarando improcedente tal acción.

14.- Este Tribunal Superior, por auto de primero de agosto de mil novecientos noventa y cinco, radicó el expediente en estudio, respecto de la acción de dotación de tierras, correspondiéndole el número de juicio agrario 183/95.

15.- El veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y cinco, el Magistrado Instructor, dictó acuerdo para mejor proveer, ordenando se requiriera del Cuerpo Consultivo Agrario, la práctica de trabajos que determinaran si los solicitantes, estaban en posesión de la superficie que se les había otorgado por Mandamiento Gubernamental, su régimen jurídico y el levantamiento topográfico de los terrenos excluyendo la Zona Federal; habiéndose comisionado al ingeniero Mario González Hernández, quien rindió su informe el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y seis, en el cual asentó que:

“...1.- Se hizo la fotoidentificación de la superficie en estudio en virtud de que por estar gran parte de ésta inundada es imposible hacer un levantamiento topográfico en campo, razón por la cual se hizo un levantamiento fotogramétrico apoyado en material adquirido en la Subdirección de Estudio y Consulta del Territorio Estatal, Dirección del Sistema Estatal de Información, Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado de México, como son las ortofotos número 1161, 1162, 1201 y 1202 a escala 1:5000 con fecha de vuelo 1989.

2.- Se hizo el cálculo del levantamiento fotogramétrico realizado, resultando una superficie total de 469-10-19.10 Has., y una superficie con cultivo de 183-02-46.30 Has., con los trabajos ya desarrollados, me permito desahogar lo ordenado en su atento oficio número 3103 de fecha 1o. de noviembre de 1995.

1.- Verificar si el poblado de nuestra atención, se encuentra en posesión de la superficie que le fue otorgada por el Mandamiento Gubernamental de fecha 10 de agosto de 1948.

Por mandamiento Gubernamental de fecha 10 de agosto de 1948 y ejecutado el 2 de octubre del mismo año, se conceden tierras al poblado de CAPULHUAC, una superficie de 514-00-00 Has., al poblado de referencia actualmente se encuentra en posesión de una parte de la totalidad de la superficie con cultivos de maíz, ya que el resto de ésta se encuentra inundada la cual no se puede cultivar, pero manifiestan los vecinos que en años anteriores se cultivaba la totalidad de la superficie, esto se observa en el plano elaborado por el suscrito y para mayor ilustración se anexan fotografías tomadas al terreno del cultivo, así como a las zonas inundadas el día de la inspección.

Esta situación también se encuentra asentado en el acta de fecha 17 de enero del presente año, misma que se anexa.

2.- Determinar el Régimen Jurídico de dicha superficie, así como el levantamiento topográfico respectivo, excluyendo aquella que sea considerada como Zona Federal.

Por Decreto Presidencial de fecha 26 de septiembre de 1924, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 31 de octubre de 1924, por el que se declara que las aguas, Lecho y riveras de la Laguna de Lerma son de Propiedad Nacional.

Por Decreto Presidencial de fecha 21 de julio de 1943, publicado en **Diario Oficial de la Federación** el 11 de septiembre del mismo año, en el que señala textualmente que mientras no se hayan concluido las obras de captación, drenaje y desecación y no haga la declaración de que los terrenos ganados o que se descubra, pierdan el carácter de inalienables e imprescriptibles y adquieran el carácter de Nacionales para los efectos del artículo VI de la Ley de Aguas de Propiedad Nacional en vigor.

De acuerdo al plano informativo de las lagunas de Lerma. Laguna Tultepec (Segundo Vaso), Estado de México escala 1:10,000 el cual se construyó con planos de esta Dependencia, así como planos de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (Comisión Nacional del Agua), en el que especifica el límite de las Lagunas de Lerma, y se observa en la parte sur de lo que fue el ejido provisional de CAPULHUAC, existen superficies de 9-30-00 Has., que éstas quedaron consideradas dentro del plano de la posesión provisional a CAPULHUAC y fuera del límite del segundo vaso de Las Lagunas de Lerma...”.

16.- Por acuerdos para mejor proveer, de diez de junio y catorce de octubre de mil novecientos noventa y seis, la magistratura de instrucción, solicitó a diversas dependencias del Ejecutivo Federal, informes tanto de la desincorporación de las 7,752-62-60 (siete mil setecientas cincuenta y dos hectáreas, sesenta y dos áreas sesenta centiáreas), de las Lagunas del Lerma, como de la situación legal de las 514-00-00 (quinientas catorce hectáreas), en posesión del grupo gestor por ejecución del mandamiento gubernamental así como, si eran susceptibles de afectación agraria para beneficiar al poblado en estudio.

17.- El seis de abril de mil novecientos noventa y ocho, el Magistrado Instructor, pronunció acuerdo para mejor proveer, ordenando solicitar a la Secretaría de la Reforma Agraria, que verificara la capacidad agraria individual y colectiva del núcleo peticionario y determinara quiénes eran sus órganos de representación; y fue que por oficio UTO/1043/98, de dieciséis de octubre del novecientos noventa y ocho, la Unidad Técnica Operativa, envió a este Tribunal, documentación, de la que se conoce que el comisionado licenciado Alejandro Colmenares Colorado, en su informe de treinta de julio del mismo año, manifestó que había suspendido los mismos, por la oposición existente de los dos grupos interesados en la presente acción agraria, y que por oficio 805 de la misma fecha, el Representante Agrario en el Estado, solicitaba que se le requiriera a este Tribunal Superior, para que determinara con cuál grupo deberían practicar los trabajos encomendados.

18.- En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, por acuerdo de diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve, el Magistrado de instrucción, determinó que fuera el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9, con sede en Toluca, Estado de México, quien realizara los trabajos de capacidad agraria individual y colectiva del grupo solicitante y verificación de sus órganos de representación; el Tribunal citado, por oficio 2464/2000, de diecisiete de octubre de dos mil, remitió los trabajos que había realizado con el apoyo de la Procuraduría Agraria y la Representación Agraria del Estado de México, y se hacen consistir en la elección tanto del Comisariado Ejidal como del Consejo de Vigilancia y los trabajos de verificación de capacidad individual y colectiva, habiéndose censado doscientas sesenta y ocho personas del núcleo agrario en estudio, de las cuales resultaron con capacidad agraria ciento sesenta y cuatro.

19.- El veintidós de noviembre de dos mil, el Magistrado Instructor, emitió acuerdo para mejor proveer, ordenando solicitar al Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, informes del procedimiento de desincorporación de los terrenos pertenecientes a las Lagunas del Lerma; dichos informes fueron proporcionados por oficio DRPCPF.-0002, de ocho de enero de dos mil uno, en los que se señaló medularmente que no se había podido establecer dicho procedimiento en tales bienes de la Federación, en los que se encuentra incluida la fracción que ocupa el poblado en estudio, debido a la problemática existente en las 7,752-62-70 (siete mil setecientas cincuenta y dos hectáreas, sesenta y dos áreas, setenta centiáreas), entregadas por la Comisión Nacional del Agua a la Secretaría de Desarrollo Social, el dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, a pesar de los trabajos interinstitucionales celebrados con la intervención de dependencias federales y estatales involucradas con este asunto, además de que no se ha contado con informes de la Secretaría de la Reforma Agraria, respecto de las ocupaciones irregulares de los terrenos ganados por la desecación de las lagunas por núcleos ejidales, comunales y posesiones precarias, iniciadas por la Delegación Agraria y en ocasiones con autorización de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, a pesar de que se los ha requerido en los años de mil novecientos noventa y cinco, a mil novecientos noventa y nueve; ni cuenta con los informes del Gobierno del Estado de México, a través de su Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas que determinen la superficie que ocupa la mancha urbana en dicha zona federal y las áreas precariamente ocupadas.

20.- Tomás Ramírez Barón y otros, por escrito de cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, solicitaron la protección constitucional en nombre del poblado “Capulhuac”, Municipio de su nombre, Estado de México, señalando como autoridades responsables entre otras a este Tribunal Superior y como actos reclamados la falta de resolución en el expediente 183/95, correspondiéndole conocer al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el amparo número 825/99, y resuelto el once de abril del mismo año, y revocada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el tres de noviembre de dos mil, ordenando reponer el procedimiento.

21.- El Juez Sexto de Distrito, en Materia Administrativa en el Distrito Federal, una vez que repuso el procedimiento, pronunció sentencia el veintiséis de septiembre de dos mil uno, resolviendo respecto de los conceptos de violación esgrimidos en contra de este Tribunal Superior, conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitada, para el efecto de que se practicaran las medidas necesarias para integrar el expediente en estudio y en su oportunidad se emitiera la resolución correspondiente.

22.- El Comisariado Ejidal del núcleo promovente por escrito de dieciocho de enero de dos mil dos, ofrecieron pruebas y alegatos de los cuales se dará cuenta con posterioridad.

23.- Este Tribunal Superior Agrario, por acuerdo plenario de siete de febrero de dos mil dos, determinó girar oficio recordatorio al Director del Patrimonio Inmobiliario Federal de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, a fin de que proporcionara los informes respecto de las 514-00-00 (quinientas catorce hectáreas), en posesión del poblado "Capulhuac", en relación con la desincorporación de las mismas, y ordenó la remisión de dicho acuerdo y la ejecutoria a la que se le estaba dando cumplimiento al Magistrado Ponente, a fin de que una vez que las Dependencias requeridas informaran respecto del acuerdo, formulara el proyecto de resolución que sometiera a la aprobación del pleno de este Tribunal.

24.- La Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal, por oficio número D.DS.-4161/2002, de quince de julio de dos mil dos, informó a este Tribunal por conducto del Director General de Asuntos Jurídicos que:

"...Me refiero a los terrenos de propiedad federal con superficie de 7,752-62-60 Has., que fueron ganados a las "Lagunas de Lerma", en el estado de México, y concretamente con aquella extensión con área de 514-00-00 Has., que conforma el poblado denominado Capulhuac, Municipio del mismo nombre, en la citada Entidad Federativa, quien tiene instaurado ante ese alto Tribunal, el juicio agrario No.183/95, sobre dotación de tierras, en el que se encuentra pendiente, dictar la resolución respectiva.

Sobre el particular y para los efectos que juzgue conveniente ese órgano jurisdiccional, con el presente le proporciono copia del oficio 20602A/1126/02 de 27 de junio de 2002, recibido en esta Dirección General vía fax, el 4 de los corrientes, donde el Arq. Víctor Manuel Chávez Alvarado, Director General de Operación Urbana, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del referido poblado, se localiza en áreas no urbanizables y fuera de los límites que comprende el Plan de Centro de Población Estratégico de Lerma, así como el correspondiente al citado poblado, teniéndose considerada a dicha superficie, por la Secretaría de Ecología del estado de México, como cuerpo de agua dentro de las de riego, además de estar contemplada en el proyecto de creación de áreas de protección a la flora y fauna del lugar, mediante la recuperación de las Lagunas, la cuales se pretenden inundar parcialmente..."

Acompañando a su recurso el oficio citado, dirigido al licenciado Luis Miranda Nava, Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, que firma el arquitecto Víctor Manuel Chávez Alvarado, Director General de Operación Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de México, en copia, el cual en su parte medular señala:

"...En atención a su oficio No. SGG/SAJ/983/2002, de fecha veintiocho de abril de dos mil dos, mediante el cual solicita ante el C. Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, se le informe sobre los usos del suelo que en base al Plan de Centro de Población Estratégico correspondiente, tienen asignados unos terrenos con una superficie de 514-00-00 has., con el objeto de que el Tribunal Superior Agrario esté en aptitud de resolver un juicio agrario promovido por pobladores de la zona de Lerma en contra de diversas autoridades federales; al respecto me permito comunicarle que del análisis del plano anexado, se encontró que estos terrenos se localizan en una zona considerada como área no urbanizable, fuera de los límites comprendidos tanto del Plan de Centro de Población Estratégico de Lerma, como de los planes de Ocoyoacac, Capulhuac, Tianguistenco y San Mateo Atenco, la cual en base a la información proporcionada por la Secretaría de Ecología del Estado de México, está considerada como un cuerpo de agua, dentro de las ciénegas de alto Lerma, donde no se permite ningún uso del suelo por ser una zona de riesgo, además de estar contemplada en el proyecto de creación de áreas de protección a la flora y fauna, mediante la recuperación de las lagunas del río Lerma, las cuales se pretenden inundar parcialmente..."

25.- El diecinueve de septiembre de dos mil dos, el Magistrado Instructor, pronunció acuerdo por medio del cual ordenó girar oficio al Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, para que proporcionara informes del procedimiento de desincorporación de los terrenos de Propiedad Federal con superficie de 7,752-62-60 (siete mil setecientos cincuenta y dos hectáreas, sesenta y dos áreas, sesenta centiáreas), ganados a las Lagunas del Lerma en el Estado de México; y el Director General de Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo por oficio D.DEC.-7041/2002 REC:202007895, de once de noviembre del mismo año, informó:

“...Me refiero a los terrenos de propiedad federal con superficie de 7,752-62-60 Has., que fueron ganados a las “Lagunas de Lerma”, en el estado de México, y concretamente a los que conforma el poblado denominado Capulhuac, Municipio del mismo nombre, en la citada Entidad Federativa, con área de 514-00-00 Has...La totalidad de los terrenos que nos ocupa, presentan una problemática sumamente compleja, motivo por el cual se han estado llevando a cabo pláticas con representantes de la Secretaría de la Reforma Agraria, de la Comisión Nacional del Agua y del Gobierno del Estado de México, a quien se le ha pedido su coadyuvancia en la solución de tal problemática, a efecto de establecer la estrategia a seguir y poder ejecutar las acciones que conforme a derecho procedan, para lograr que a dichos terrenos, se les de el uso mas adecuado y mejor aprovechamiento posible.

No obstante lo anterior, una vez más hago de su conocimiento que a juicio de esta Dirección General, ese Alto Tribunal, para dictar una resolución sobre terrenos federales, ya sea de tierras, como es el caso del poblado de “Capulhuac”, Municipio del mismo nombre en el estado de México, ampliación o restitución de tierras para ejidos o comunidades, no requiere de que estos terrenos sean desincorporados previamente, lo que le fue dado a conocer en el diverso D.DEC.-1539/2002 de 18 de marzo del presente año, del que para mejor proveer, le acompañó, del que le envió un tanto, esta Unidad Administrativa, también hizo de su conocimiento para los efectos a que hubiere lugar, la situación de la superficie de 514-00-00 Has., dentro de la que se localiza el citado poblado de “Capulhuac”,...

Lo anterior, a efecto de que ese órgano jurisdiccional, esté en condición de que tomando en cuenta el tipo de terrenos en que se ubica el poblado de referencia, el estado procedimental de la desincorporación de la totalidad de aquellos que conforman las Lagunas de Lerma y, que sobre los mismos o de cualesquiera que aún siendo propiedad del Gobierno Federal, fuere necesario que ese Tribunal tuviere que dictar una resolución, no se requeriría de su previa desincorporación, para la afectación de los mismos...”

26.- Este Tribunal Superior Agrario, el seis de diciembre de dos mil dos, emitió sentencia en cumplimiento a la ejecutoria del Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo indirecto 825/99, promovido por el comisariado ejidal del poblado en estudio, resolviendo modificar el mandamiento del Gobernador del Estado de México, de diez de agosto de mil novecientos cuarenta y ocho, y otorgar al poblado multicitado por dotación 192-32-46.30 (ciento noventa y dos hectáreas, treinta y dos áreas, cuarenta y seis centiáreas, treinta milíareas), que se tomarían de la “Ciénega de Chimaliapan” de propiedad Federal, en beneficio de los ciento sesenta y cuatro capacitados.

27.- Los integrantes del Comisariado Ejidal del poblado “Capulhuac”, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, mismo que se les concedió por ejecutoria de seis de febrero de dos mil cuatro, del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el juicio de amparo D.A.295/2003, para los efectos de que fuera dejada insubsistente la sentencia impugnada, ordenara la práctica de trabajos técnicos informativos y las diligencias necesarias para determinar si las restantes 322-00-00 (trescientas veintidós hectáreas) dotadas en provisional era posible que fueran tomadas de los terrenos que se refiere el Decreto Presidencial de veintiuno de julio de mil novecientos cuarenta y tres, y consecuentemente aptas para ser destinadas para satisfacer las necesidades agrarias de los peticionarios y en su momento se dictara la Resolución respectiva, destacando que las 192-32-46.30 (ciento noventa y dos hectáreas, treinta y dos áreas, cuarenta y seis centiáreas, treinta milíareas) de “Ciénega de Chimaliapan”, quedaban intocadas.

28.- Este Tribunal Superior Agrario, en cumplimiento de ejecutoria pronunció acuerdo plenario el treinta de noviembre de dos mil tres, dejando insubsistente la sentencia de mérito, señalando que al dictarse la nueva sentencia se debería reiterar la afectación referida en el párrafo anterior y, en su caso, afectar la superficie que pudiera existir derivada de los trabajo que se realizarían.

29.- El Magistrado Instructor pronunció acuerdo para mejor proveer en el sentido de que en auxilio de las labores de este Tribunal Superior Agrario, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9, practicara trabajos técnicos necesarios, previa notificación al Comisariado Ejidal del poblado en estudio, al Delegado de la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de Planeación del Gobierno, ambos del Estado de México, con los que se determinara si con motivo del Decreto Presidencial de veintiuno de julio de mil novecientos cuarenta y tres, se describieron terrenos para ser destinados a cubrir las necesidades agrarias del poblado quejoso y de haber terrenos afectables, determinar si las 322-00-00 (trescientas veintidós hectáreas) que inicialmente se les dotó al ejido en estudio por mandamiento provisional se puedan tomar de los terrenos de referencia.

30.- Los nuevos integrantes del Comisariado Ejidal del poblado “Capulhuac”, presentaron escrito por medio del cual solicitaron su reconocimiento acompañando las documentales que acreditaban tal personalidad.

31.- El Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9, dio cumplimiento a las órdenes contenidas por el acuerdo para mejor proveer de ocho de junio de dos mil cuatro, y remitió las documentales generadas, consistentes en el informe de la Brigada de Ejecución, acta circunstanciada y fotografías.

En su informe, señalaron que en primer lugar, habían contactado con las autoridades ejidales del poblado peticionario, quienes les habían informado que parte de los terrenos y caminos de acceso sobre los que se harían los trabajos estaban anegados, "esto es anegados" y, trasladándose a los mismos, habían corroborado que a la mayoría de las áreas, habían llegado caminando por lo inundado, fotografiando los terrenos por el lado sureste del polígono, ya que a la otra parte del terreno les había sido imposible ingresar, subrayando que las fotos correspondían a las partes con menos agua, y que sus acompañantes les dijeron que para llegar a la mojonera central, sólo se podía hacer en lancha, pues estaba en el área más inundada.

Ahora bien, el acta que al efecto levantaron, de su parte medular se conocen las siguientes circunstancias, ya anotadas en el informe al que se hace referencia pero, con mayor detalle como se verá a continuación:

"...LOS INTEGRANTES DEL COMISARIADO COMENTARON QUE LOS TERRENOS SOBRE LOS CUALES SE TIENEN QUE MEDIR E IDENTIFICAR, SE ENCUENTRAN ANEGADOS; NO OBSTANTE LO ANTERIOR NOS TRASLADAMOS A LOS TERRENOS INICIANDO EL RECORRIDO POR EL CAMINO QUE LLAMAN CARRIL DOS QUE CONDUCE A LA MOJONERA CENTRAL; PERCATANDONOS QUE NO EXISTE PASO POR QUE ESTAN INUNDADAS LAS TIERRA EN ESTE MOMENTO PARA LO CUAL Y A EFECTO DE ILUSTRAR A LA SUPERIORIDAD SE TOMAN VARIAS PLACAS FOTOGRAFICAS DEL LUGAR, ACTO CONTINUO NOS TRASLADAMOS AL CARRIL NUMERO UNO, MISMO QUE TAMBIEN ESTA INUNDADA INCLUSO SE HACE NOTAR QUE EL VEHICULO NO LLEGO AL LUGAR EN DONDE NOS UBICAMOS Y TOMAMOS PLACAS FOTOGRAFICAS, HACIENDO NOTAR QUE TAMPOCO EXISTE ACCESO POR LO INUNDADO DE LOS TERRENOS; ASI BIEN NOS TRASLADAMOS A OTRA AREA DENOMINADA CARRIL CINCO, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES DE INUNDACION, TOMANDO PLACAS FOTOGRAFIAS DE LOS TERRENOS Y POR MANIFESTACION DE LOS INTEGRANTES DEL COMISARIADO LAS DEMAS AREAS ESTAN INACCESIBLES TANTO QUE PARA LLEGAR A LA MOJONERA CENTRAL SOLO SE PODRIA CON CANOA O LANCHAS, Y REFIEREN QUE TODO ESTO POR SER LA TEMPORADA DE LLUVIAS, ACLARANDO LOS PRESENTES QUE LOS CAMINOS DE ACCESO Y ALGUNOS TERRENOS SON LOS QUE ESTAN INUNDADOS, Y EN CUANTO AL CARRIL DOS EL DE LA VOZ ASENTE QUE CONDUCE A LA MOJONERA CENTRAL Y NO ES ASI SINO QUE ES UN CAMINO QUE ATRAVIESA EL EJIDO DE ORIENTE A PONIENTE, ESTANDO LA MOJONERA CENTRAL EN LA PARTE NORTE, A LA CUAL NO SE TUVO ACCESO POR LO INUNDADO DE TODOS LOS ACCESOS; POR LO QUE ANTE LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS TECNICOS INFORMATIVOS; SE LEVANTA LA PRESENTE PARA CONSTANCIA LEGAL, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN QUIENES NOS ACOMPAÑARON AL RECORRIDO Y PREVIA LECTURA DE LA MISMA..."

QUINTO. Una vez que este Tribunal analizó y estudió los autos del expediente que nos ocupa, se llegó a las siguientes conclusiones:

El comisionado Efrén Espinoza Hernández, en su informe de veintiséis de noviembre de mil novecientos cuarenta y siete, manifestó que había encontrado al grupo solicitante en posesión de 514-00-00 (quinientas catorce hectáreas), del predio "Ciénega de Chimaliapan", en el Estado de México, y fue con base en dichos trabajos, la entonces Comisión Agraria Mixta en el Estado de México, había emitido su dictamen, proponiendo dotar al grupo solicitante con las tierras que tenían en posesión; posteriormente el Gobernador en su Mandamiento de diez de agosto del siguiente año, confirmó tal dictamen; mandamiento provisional que fue ejecutado en todos sus términos por el topógrafo Roberto Rayón C., el dos de octubre de mil novecientos cuarenta y ocho; posesión provisional que fue verificada por el comisionado de la Secretaría de la Reforma Agraria, ingeniero Mario González Hernández quien en su informe de veinticinco de enero de mil novecientos noventa y seis, señaló que cuando había realizado la inspección, el grupo tenía solamente 183-02-46.30 (ciento ochenta y tres hectáreas, dos áreas, cuarenta y seis centiáreas, treinta miláreas), en posesión, las cuales cultivaban de maíz, y el resto de la superficie la había encontrado inundada; por último, que del cálculo practicado, habían resultado en la parte sur del ejido provisional de "Capulhuac", 9-30-00 (nueve hectáreas, treinta áreas), consideradas dentro del plano de la posesión provisional, fuera del límite del segundo vaso de las "Lagunas de Lerma".

Trabajos a los que este Tribunal Superior Agrario, les concede pleno valor probatorio, conforme al artículo 189 de la Ley Agraria, en relación con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, al tratarse de documentos que fueron expedidos por un funcionario público, revestido de fe pública en el ejercicio de sus funciones.

SEXTO. Por otro lado, también de autos se conoce que, el Decreto Presidencial de veinticinco de septiembre de mil novecientos veinticuatro, publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, el treinta y uno de octubre del mismo año, declaró las aguas, el lecho y las riberas de las "Lagunas del Lerma", en el Estado de México, de propiedad nacional; y los acuerdos presidenciales de veintinueve de diciembre de mil

novecientos veintiuno, publicados en el **Diario Oficial de la Federación**, el dieciséis de febrero y treinta y uno de octubre de mil novecientos veintidós, y el once de septiembre de mil novecientos cuarenta y tres, se declararon propiedad de la Nación, los terrenos de la Laguna de Lerma, estableciendo que los mismos permanecerían inalienables e imprescriptibles, en tanto finalizaran las obras de captación y desecación correspondientes, que dejarían al descubierto terrenos para aprovechamiento agrícola que resolverían las necesidades agrarias de poblados citados en el mismo, y con base en tales antecedentes, tanto el Delegado Agrario en el Estado de México, como el Cuerpo Consultivo Agrario, pronunciaron su resumen y opinión, el once de septiembre de mil novecientos noventa y dos, el dictamen de trece de octubre de mil novecientos noventa y tres, proponiendo negar la dotación de tierras, ya que las 514-00-00 (quinientas catorce hectáreas), concedidas por Mandamiento Gubernamental, se ubicaban dentro de los terrenos señalados en los decretos presidenciales ya citados, y no habían sido desincorporados.

SEPTIMO. El Magistrado Instructor, contando con los antecedentes señalados, por acuerdos para mejor proveer de diez de junio y catorce de octubre de mil novecientos noventa y seis y veintidós de noviembre de dos mil, requirió de diversas dependencias del Ejecutivo Federal, informes de la situación real y jurídica de los terrenos incluidos en el Acuerdo y Decreto Presidencial citado en considerandos anteriores, entre los que se localiza la superficie que tienen en posesión los solicitantes de dotación de tierras del poblado en estudio concedida por Mandamiento Gubernamental, de diez de agosto de mil novecientos cuarenta y ocho; resultando que los informes obtenidos, coinciden en señalar que no existe la desincorporación de los terrenos por la problemática existente en toda la superficie.

Ahora bien, la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, ahora Secretaría de la Función Pública, por conducto de su Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal, en su oficio número DRPCPF-0002, de ocho de enero de dos mil uno, informó a este Tribunal Superior Agrario, que debido a la suspensión de los trabajos que se realizaban conjuntamente con las dependencias federales y estatales, no se ha podido establecer el procedimiento de desincorporación de terrenos desecados pertenecientes al "Río Lerma".

La misma Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal, por oficio D.DEC.-4161/2002, de quince de julio de dos mil uno, comunicó que, conforme a los antecedentes que les proporcionó el arquitecto Víctor Manuel Chávez Alvarado, Director General de Operación Urbana, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de México, la superficie ocupada por el poblado en estudio, "Capulhuac", Municipio de Capulhuac, Estado de México, no era una área urbanizable, además de que estaba fuera de los límites del "Plan Centro de Población Estratégico del Lerma", teniéndose considerada tal superficie por la Secretaría de Ecología del Estado de México, como cuerpo de agua dentro de las Ciénegas del Alto Lerma, donde no se permite ningún uso de suelo, al ser zona de riesgo y estar contemplada en el proyecto de creación de áreas de protección a la flora y la fauna del lugar por la recuperación de las lagunas que se pretenden inundar parcialmente.

Posteriormente el Director General de Patrimonio Inmobiliario Federal, en cumplimiento del acuerdo para mejor proveer de diecinueve de septiembre de dos mil dos, por oficio número D.DEC.-7041/2002 REG:202007895, informó medularmente que en este caso, no se necesitaba que los terrenos que solicita en dotación el poblado en estudio, fueran desincorporados previamente para que este Tribunal Superior, los afectaran agrariamente.

OCTAVO. Por último, en cumplimiento a la ejecutoria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito Federal, de seis de febrero de dos mil cuatro, en el juicio de amparo 295/2003, se practicaron trabajos técnicos informativos a fin de: "...determinar si las restantes trescientas veintidós hectáreas de las que inicialmente se dotó a la comunidad, ejidal quejosa por mandato del Ejecutivo del Estado de México, es posible sean tomadas de los terrenos a que se refiere el decreto presidencial de veintiuno de julio de mil novecientos cuarenta y tres, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el once de septiembre del mismo año, y consecuentemente, aptas para ser destinadas a satisfacer sus necesidades agrarias; hecho que sea, proceda a dictar la resolución que corresponda..."; trabajos practicados por la brigada de ejecución del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9, integrada por el licenciado Isaías Gutiérrez Narváez e ingeniero Daniel Cárdenas Téllez, de los cuales se desprende según su informe de seis de octubre de dos mil cuatro, al que acompañaron acta circunstanciada y una serie de fotografías, que los terrenos sobre los cuales se harían los trabajos, estaban anegados e inclusive hasta inundados por lo cual, no pueden contribuir a satisfacer las necesidades agrarias del poblado en estudio; trabajos a los que se les concede pleno valor probatorio, conforme al artículo 189 de la Ley Agraria, en relación con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, al tratarse de documentos que fueron expedidos por un funcionario público, revestido de fe pública en el ejercicio de sus funciones.

NOVENO. Respecto a las pruebas presentadas por los peticionarios en diversas ocasiones, se procede a realizar su valoración de la siguiente manera:

1.- De las treinta y cinco fotografías, presuntamente de los terrenos que tienen en posesión por Mandamiento Gubernamental, éstas no cuentan con la certificación que acredite el lugar, tiempo y circunstancia en que fueron tomadas y que corresponden a lo representado en ellas, por lo tanto, conforme al artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, no constituyen prueba plena, no obstante lo anterior, de las mismas se aprecian terrenos de labor, pero preponderantemente terrenos inundados que cuentan con carrizo, lirio, etc.

2.- Oficio número PMC/150/01/2002, de once de enero de dos mil dos, expedido por el ingeniero Benjamín Aguilar García, Síndico Municipal del Ayuntamiento de Capulhuac, Estado de México, dirigido al Magistrado Presidente de este Tribunal Superior, por medio del cual hace constar que los integrantes del ejido "Capulhuac", año con año practican trabajos de desazolve y saneamiento en el "Río Acalote" que pasa por tal ejido con el fin de prevenir y evitar inundaciones en época de lluvias que dañen los cultivos de maíz y hortalizas que realizan en los terrenos que poseen desde tiempos inmemoriales, manifestando además, que es el ejido que aporta forraje para ganado, maíz y hortalizas que consume la población; respecto de este documento, es preciso señalar que las constancias de once de enero de dos mil dos, expedido por el ingeniero Benjamín Aguilar García, Síndico Municipal del Ayuntamiento de Capulhuac, Estado de México, que presentaron, son de desestimarse toda vez que, las autoridades municipales, no son competentes para conocer y hacer constar hechos que se encuentran fuera de sus atribuciones, así lo ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente jurisprudencia:

"...CERTIFICACIONES OFICIALES. No tiene eficacia probatoria suficiente para acreditar la posesión en materia agraria.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha asentado jurisprudencia en el sentido de que las certificaciones expedidas por las autoridades sobre asuntos ajenos a sus funciones, no tienen ningún valor jurídico, y para utilizar su dicho en lo que no se refiere a dichas funciones es preciso promover la prueba testimonial con arreglo a derecho (tesis número 59, página 105, octava parte de la compilación 1917-1975). En el caso de la existencia en autos de una certificación oficial, como es la que expide un presidente municipal, aun en el supuesto de que tuviera algún valor probatorio, no tiene eficacia para acreditar la posesión especialmente caracterizada a que se refieren los artículos 66 del Código Agrario abrogado y 252 de la vigente Ley Federal de Reforma Agraria..."

Séptima _Epoca, Tercera Parte:

Vol. 78 pág. 43 A.R. 4287/71 Antonio Dosado Gutiérrez y otro. Unanimidad de 4 votos.

Vol. 80, pág.16 A.R.4121/74. Comunidad de San Bruno y sus Demasías. Mpio. de Cucurpe, Son. 5 votos.

Vols.91-96, pág. 11. A.R.1105/75 Gastón Luis Olliver Anchondo y otros. Unanimidad de 4 votos.

Vols. 91-96, pág. 11 A.R. 2093/75 José Elizondo y otros. 5 votos.

Vols. 91-96, pág. 11 A.R. 2990/76. Juan Huervo Patraca. 5 votos.

A mayor abundamiento, respecto de que, a las documentales citadas, no se les concede ningún valor porque las autoridades que las expedieron no tienen facultades para emitir este tipo de constancias, también es aplicable el criterio sustentado en la tesis correspondiente a la Quinta Epoca, instancia: tercera sala, fuente: informes, tomo informe 1940, en la página 18 del tenor literal siguiente:

"...CERTIFICACIONES. Las certificaciones por autoridades administrativas solo pueden acreditar los hechos que se contraen al ejercicio de sus funciones y en relación con las constancias de sus respectivos archivos y, no hacen prueba plena como instrumentos públicos en materias ajenas.

Revisión 6437.Odilón Reyerros. 30 de enero de 1940. la publicación no menciona el sentido de la votación ni el nombre del ponente..."

3.- Tres contratos de prestación de servicios, firmados por el Representante del Ayuntamiento Constitucional de Capulhuac y Juan Gil Armas, de veintiséis de marzo, diecinueve de mayo y dos de agosto de dos mil uno, por medio de los cuales el segundo de los citados se comprometía a realizar trabajos de desazolve en el "Río Acalote", y el Ayuntamiento, le pagaría por sus servicios, en cada contrato \$25,000.00 (veinticinco mil pesos); estos documentos, no resultan ser los idóneos para demostrar que, el grupo solicitante se encuentra en posesión de la totalidad de los predios que les fueron concedidos por mandamiento gubernamental, pues lo único que se logra demostrar es que el representante del Ayuntamiento de Capulhuac, celebró un contrato con Juan Gil Armas, para realizar trabajos en el "Río Acalote".

4.- Recibo de pago de derechos, realizado por Tomás Ramírez Barrón, de dieciséis de noviembre de dos mil uno, ante la Secretaría de Hacienda, que comprende el periodo de noviembre de dos mil uno, a marzo de dos mil dos, por \$18,240.00 (dieciocho mil doscientos cuarenta pesos) a favor de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, por el permiso de aves acuáticas, (40 cintillos, costo unitario \$150.00) y derecho de aprovechamiento de caza (40x304); documentos con que se logra demostrar que Tomás Ramírez Barrón, integrante del grupo peticionario, realizó un pago por la cantidad citada a favor de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, por concepto de permiso y derecho de aprovechamiento de caza.

5.- Oficio número DEFMARNAE/SMA/F4802/250/2000, de veintisiete de septiembre de dos mil, firmado por el Delegado Federal de Medio Ambiente en el Estado de México, de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, por medio del cual se otorga el registro para el establecimiento de una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, por tres años a nombre de Tomás Ramírez Barrón, con domicilio en el ejido "Capulhuac", Municipio de Capulhuac, registrando como nombre de la unidad de manejo (UMA) el ejido "Capulhuac", autorizando una superficie de 120-00-00 (ciento veinte hectáreas) reconociendo los terrenos, de carácter ejidal y estableciendo como la finalidad de ésta, la conservación y manejo de vida silvestre de las siguientes especies: pato triguero, pato golondrina, pato cola prieta o pato pinto, pato cuchara o bocón, pato chalcuan o panadero, pato cuacoxtle, pato cabeza roja, pato boludo chico, pato tepalcate, cerceta café o canela, cerceta alas verdes, cerceta alas azules, ganga, gallareta y agachona; actuaciones a las que se les otorga pleno valor probatorio en virtud de haberse practicado por un funcionario públicos en el ejercicio de sus funciones, dentro de los límites de su competencia, conforme a los artículos 129 y 130 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia agraria; lográndose demostrar con dicha documental, que a nombre de Tomás Ramírez Barrón, que radica en el ejido "Capulhuac", Capulhuac, México, se expidió el registro de una Unidad de Conservación de la Vida Silvestre por tres años, en 120-00-00 (ciento veinte hectáreas), además de que se dice que, tales terrenos están administrados por la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

6.- Veintiún cláusulas de operación de la Unidad de Manejo, para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA); documento al que se le otorga pleno valor probatorio y con el se logra llegar al conocimiento que las unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, reguladas por la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, deben cumplir con instrucciones específicas para su funcionamiento establecidas por la dependencia del Ejecutivo Federal citada.

Luego entonces, este Tribunal Superior, hace las siguientes estimaciones; de autos se desprende que ni en los terrenos que conforman el radio legal de afección del poblado en estudio ni en las comprendidas en el Decreto Presidencial de veintiuno de julio de mil novecientos cuarenta y tres, publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, el once de septiembre del citado año, existen tierras que por sus características pudieran resultar aptas para se afectadas a favor del ejido peticionario.

Ahora bien, no obstante lo expresado en el párrafo que antecede, es procedente tomar en cuenta lo siguiente, la superficie concedida por Mandamiento Gubernamental, que no le ha sido dotada en definitiva al poblado "Capulhuac", Capulhuac, México, es del orden de 321-67-53.70 (trescientas veintiuna hectáreas, sesenta y siete áreas, cincuenta y tres centiáreas, setenta miliáreas) en virtud de que en la documentación que conforman los autos, en repetidas ocasiones, lisa y llanamente, se ha señalado que están inundadas.

Pero a pesar de tales aseveraciones, este Tribunal Superior Agrario en un análisis exhaustivo a las constancias que reflejan la situación real imperante en los terrenos cuya superficie se acaba de señalar, destaca que durante la sustanciación de este juicio, quedó probado que desde que el poblado en estudio fue beneficiado por Mandamiento Gubernamental, el diez de agosto de mil novecientos cuarenta y ocho, en realidad ha tenido en posesión la totalidad de las 514-00-00 (quinientas catorce hectáreas), en la inteligencia de que parte de éstas, que es inundable, la aprovechan para fines agrícolas en los meses del año en que no llueve, e inclusive dentro de esta superficie se localiza la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, reconocida por la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

A mayor abundamiento, no debe perderse de vista que respecto de las 321-67-53.70 (trescientas veintiuna hectáreas, sesenta y siete áreas, cincuenta y tres centiáreas, setenta miliáreas), que poseen los solicitantes, en ningún momento han sido perturbados en la misma o, en su caso, se ha ejercitado algún medio de impugnación, cuya finalidad fuera desposeerlos de la citada superficie, ya sea por particulares, grupos de campesinos, comunidades agrarias o funcionarios de dependencias federales o estatales; haciendo resaltar que desde la fecha en que se ejecutó el mandamiento del Ejecutivo Federal, han transcurrido más de cincuenta años.

Por las consideraciones antes expuestas, este Tribunal Superior Agrario, concluye que procede confirmar el Mandamiento Gubernamental de diez de agosto de mil novecientos cuarenta y ocho, que concedió por concepto de dotación de tierras al poblado "Capulhuac", Municipio Capulhuac, Estado de México, 514-00-00 (quinientas catorce hectáreas), de terrenos propiedad de la Federación, con fundamento en el artículo 204 de la Ley Federal de Reforma Agraria, para beneficiar a ciento sesenta y cuatro campesinos capacitados.

Procediendo a hacer la siguiente aclaración, de las 514-00-00 (quinientas catorce hectáreas), citadas, este Tribunal Superior, por sentencia de seis de diciembre de dos mil dos, concedió al poblado en estudio 192-32-46.30 (ciento noventa y dos hectáreas, treinta y dos áreas, cuarenta y seis centiáreas, treinta miláreas) afectación que se encuentra firme al no haber sido impugnadas por ningún medio legal.

Una vez hecha la aclaración anterior, es de concluirse que procede la afectación de 321-67-53.70 (trescientas veintiuna hectáreas, sesenta y siete áreas, cincuenta y tres centiáreas, setenta miláreas), de terrenos propiedad de la Federación con fundamento como ya se había dicho en párrafos anteriores, en el artículo 204 de la Ley Federal de Reforma Agraria, para beneficiar al poblado "Capulhuac", Municipio Capulhuac, Estado de México, no obstante y como ya quedó señalado están en posesión de ellas y, aunque en una parte del año se inundan, en las épocas de secas, las han venido trabajando, a partir de que se les entregaron en provisional; en la inteligencia de que dentro de esta superficie, en 120-00-00 (ciento veinte hectáreas), está establecida una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), que el ejido de "Capulhuac" tiene legalmente registrada en la Delegación, de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en el Estado de México, por último, respecto al destino que se le dará a las tierras que se conceden, la asamblea resolverá conforme a las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria, en la inteligencia de que la superficie que se concede, solamente podrán dedicarse a labores agrícolas o ganaderas sin opción a construir viviendas.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en la fracción XIX, del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 43 y 189 de la Ley Agraria; 1o., 7o. y cuarto transitorio fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se

RESUELVE:

PRIMERO. Esta sentencia, se emite en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el seis de febrero de dos mil cuatro, en el juicio de amparo directo número D.A.-295/2003, promovido por Tomás Ramírez Barón y otros, en representación del núcleo solicitante de tierras del poblado denominado "Capulhuac", Municipio de Capulhuac, Estado de México.

SEGUNDO. Se confirma el Mandamiento del Gobernador del Estado de México, pronunciado el diez de agosto de mil novecientos cuarenta y ocho.

TERCERO. Se concede al poblado citado en el primer resolutivo de esta sentencia, por concepto de dotación de tierras, una superficie de 321-67-53.70 (trescientas veintiuna hectáreas, sesenta y siete áreas, cincuenta y tres centiáreas, setenta miláreas), que se tomarán del predio "Ciénega de Chimaliapan", de propiedad Federal, para beneficiar al poblado en estudio.

CUARTO. Comuníquese con copia certificada de la presente sentencia al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cumplimiento que se está dando a la ejecutoria del seis de febrero de dos mil cuatro, en el juicio de amparo directo número D.A.-295/2003, promovido por Tomás Ramírez Barón y otros, en representación del poblado "Capulhuac", Capulhuac, Estado de México.

QUINTO. Publíquese: esta sentencia, en el **Diario Oficial de la Federación** y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México, y los puntos resolutivos de la misma, en el Boletín Judicial Agrario; inscribáse en el Registro Público de la Propiedad que corresponda; asimismo, inscribáse en el Registro Agrario Nacional.

SEXTO. Notifíquese a los interesados; comuníquese al Gobernador del Estado de México, a la Procuraduría Agraria y a las secretarías de: la Función Pública, del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Reforma Agraria, por conducto de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, ejecútense, y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de cinco votos, lo resolvió el Tribunal Superior Agrario; firman los Magistrados que lo integran, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

México, Distrito Federal, a veinticinco de enero dos mil cinco.- El Magistrado Presidente, **Ricardo García Villalobos Gálvez**.- Rúbrica.- Los Magistrados: **Luis Octavio Porte Petit Moreno**, **Rodolfo Veloz Bañuelos**, **Luis Angel López Escutia**, **Carmen Laura López Almaraz**.- Rúbricas.- El Secretario General de Acuerdos, **Humberto Jesús Quintana Miranda**.- Rúbrica.